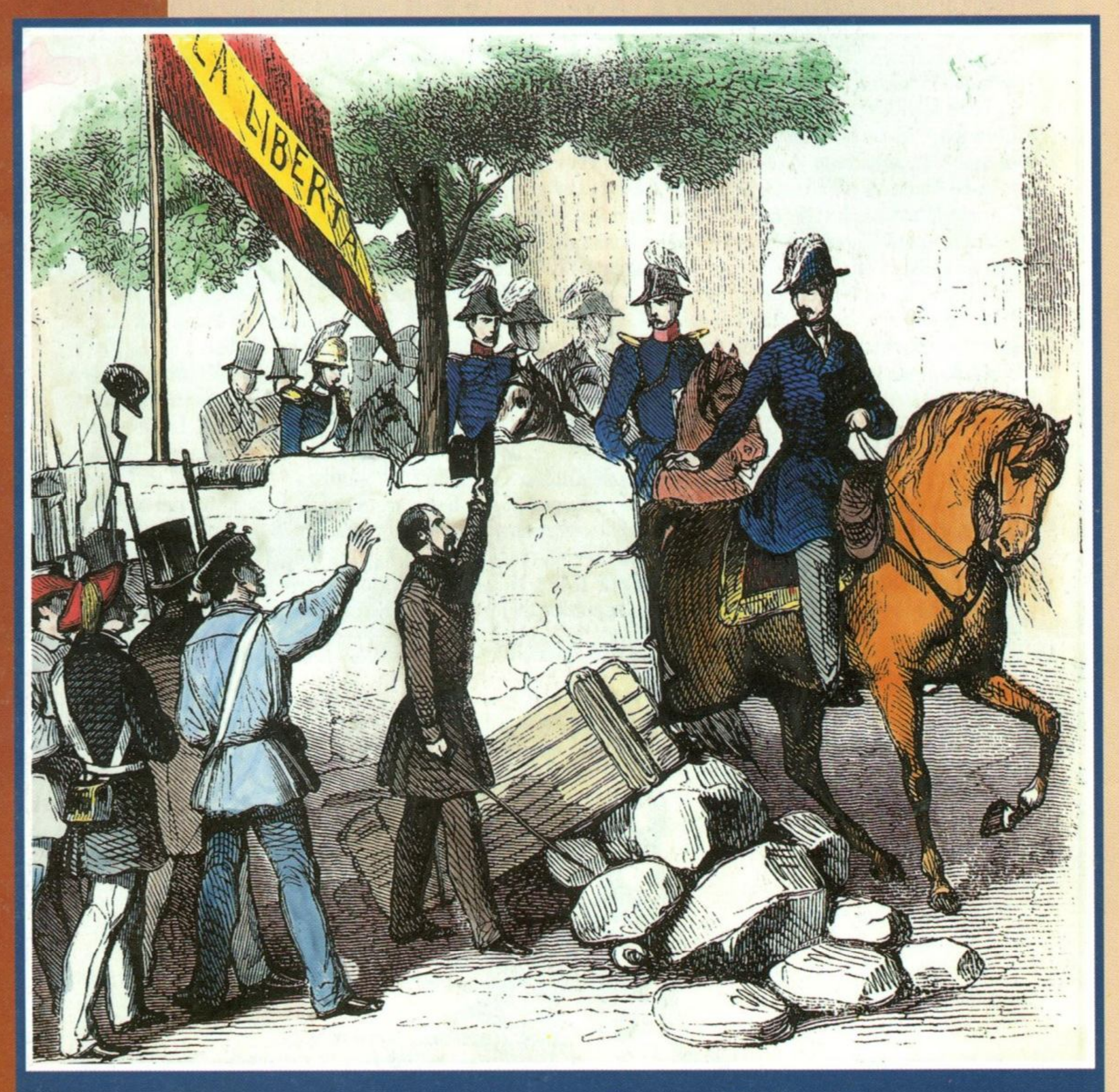
Cuadernos

Historia 16

250 PTAS



Los pronunciamientos

Gabriel Cardona

59

Cuadernos
Historia 16

Plan de la Obra

Rufino González, 34 bis
28037 Madrid. Tel. 304 65 75

ISBN: 84-7679-286-7 (Fascículos)
ISBN: 84-7679-287-5 (Obra completa)
Depósito legal: M-29314-1996

Distribución en quioscos: SGEL
Suscripciones: Historia 16. Calle Rufino González, 34 bis
28037 Madrid. Tel. 304 65 75

Fotocomposición y fotomecánica: Amoretti S.F., S.L.
Impresión: Graficinco, S.A.
Encuadernación: Mavicam
Printed in Spain - Impreso en España

Precio para Canarias, Ceuta y Melilla: 275 ptas., sin IVA, incluidos gastos de transporte.

Historia 16

Indice



En la portada, el general Espartero recorre las barricadas de Madrid en 1854. Izquierda, general Evaristo San Miguel, uno de los conspiradores más activos del siglo XIX



Página derecha, defensa del Parque de Artillería por los capitanes Daoiz y Velarde, apoyados por las tropas y el pueblo de Madrid; arriba, Malasaña y su hija combaten contra los franceses el Dos de Mayo

Los pronunciamientos militares

Gabriel Cardona
Profesor de Historia Contemporánea. Universidad de Barcelona

Los primeros alzamientos de oficiales contra el poder constituido ocurrieron ya durante la guerra de la Independencia. Ya en la revuelta madrileña del 2 de mayo de 1808, Daoíz, Velarde y Ruiz hicieron armas contra los franceses contraviniendo las órdenes de las autoridades militares españolas, que felicitaron a Murat por su victoria sobre *la canalla.* Por otra parte, la guerra modificó el aristocrático cuerpo de oficiales, al posibilitar la formación de mandos procedentes de las clases medias y bajas, que alcanzaron sus grados en las academias fundadas por el régimen patriótico o en las guerrillas, hombres que, cuando llegó la paz, esperaban vivir de su nueva profesión.



Contra la legalidad establecida por las Cortes de Cádiz, Fernando VII fue restaurado en España como monarca absoluto gracias a la proposición de Elío, capitán general de Valencia, reforzada por el *Manifiesto de los Persas.* La iniciativa de Elío, que permitió al rey declarar *nulos y sin valor ni efecto* la Constitución y los decretos de las Cortes de Cádiz y reo de lesa majestad a quien los siguiera, inauguró una época de militarismo, durante la cual los militares actuaron como brazo armado de los partidos, cuyos verdaderos hombres fuertes eran generales.

Siempre había sido fundamental el ejército en la monarquía española y la autoridad de los capitanes generales enmarcó la administración pública del siglo XVIII. Pero desde la acción de Elío, a la pugna entre liberales o absolutistas se añadió el malestar militar provocado por la desmovilización, pues no había dinero para pagar el descomunal ejército surgido de la guerra de la Independencia, en el cual los nuevos oficiales chocaban con la competencia de los nobles.

Las contradicciones sociales, políticas, económicas e ideológicas de la sociedad española se sumaron a las rivalidades entre los cuerpos del ejército, a los intereses contrapuestos de generales, oficiales y sargentos y a las angustias de la tropa forzosa y mal pagada, para desembocar en pronunciamientos vertebrados por los militares, aunque siempre con una base social y un método que iba desde el golpe puro con apoyo político civil, a la colaboración de los militares con una revuelta de paisanos.

Absolutistas y liberales

Aunque se deba al general Elío el primer ejemplo, correspondió a los liberales la utilización sistemática de los pronunciamientos como instrumento de lucha política, amparado frecuentemente con el argumento de que el ejército era depositario de la voluntad general y la institución democrática por excelencia, ya que todas las clases sociales servían en sus filas.

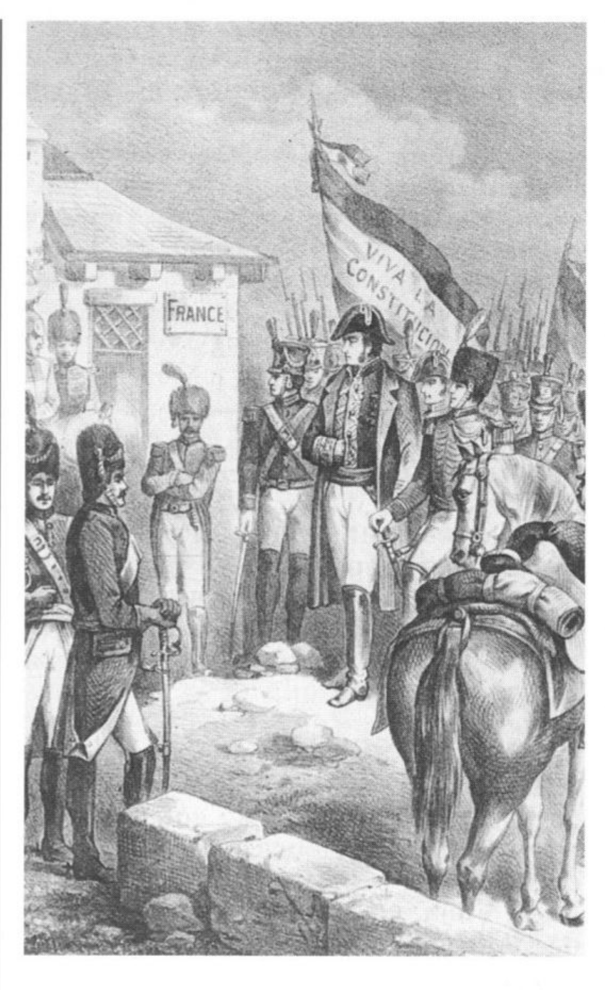


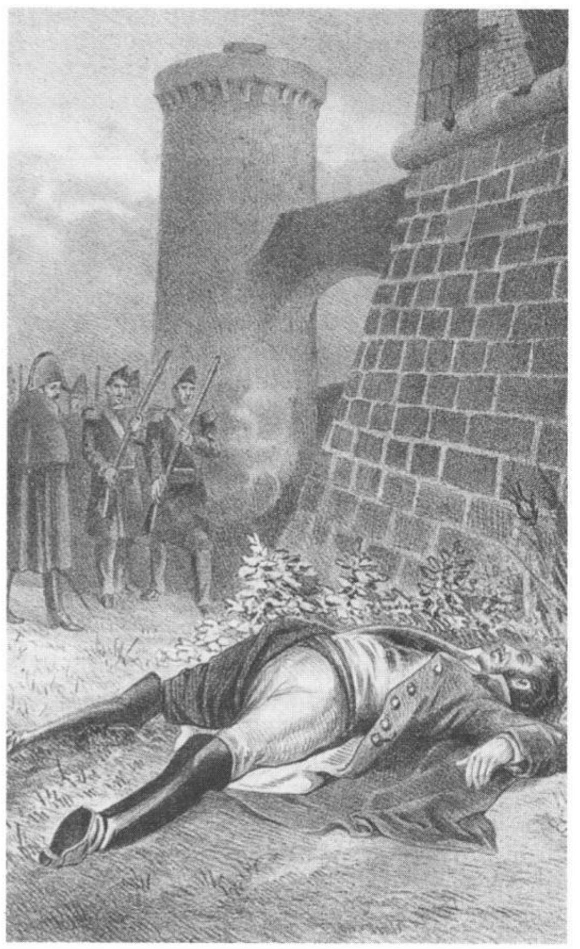
Los primeros pronunciamientos fueron, en parte, hijos del resentimiento de los héroes de la guerra de la Independencia, que se sentían tratados ingratamente por Fernando VII. En 1814 Mina, cuyas guerrillas habían sido disueltas, marchó sobre Pamplona; en 1815 Porlier, enviado a una guarnición de provincias, se apoderó de La Coruña; en 1816 Richart, oficial de intendencia que no pudo integrarse en la administración civil, colaboró con la conspiración del Triángulo que planeaba asesinar al rey; en 1817 se descubrió la conspiración de Lacy, postergado tras una carrera meteórica, y se pronunció Milans del Bosch en Cataluña; en 1819 Vidal preparó un movimiento en Valencia. Fracasaron todos, ordinariamente sin víctimas pero Porlier, Lacy y Vidal fueron fusilados, aunque los dos últimos no habían pasado de los preparativos.

La ejecución de Lacy conmocionó al ejército y contuvo muchos entusiasmos. Sin embargo, se inició una nueva conspiración en las unidades concentradas en Andalucía en espera de embarcar hacia las colonias americanas sublevadas. El general conde de La Bisbal, que estaba implicado, se arrepintió en plena conjura y arrestó a los comprometidos de mayor graduación, entre ellos el coronel Quiroga, enlace de los masones de Cádiz, nacionalistas y liberales, que contaban con Alcalá Galiano, Istúriz y Mendizábal.

El pronunciamiento, arma política

A pesar de las medidas de La Bisbal, los oficiales liberales captaron a los sargentos y soldados, que no deseaban embarcarse para América. Sin consultar a sus aliados civiles, el 1 de enero de 1820, el comandante Riego proclamó la Constitución de 1812 en Cabezas de San Juan; en cambio, Quiroga perdió un día y no pudo apoderarse de Cádiz. Aunque el ejército monárquico no intervino, la sublevación quedó aislada y sin fuerza hasta que, a finales de febrero y principios de marzo, se produjeron pronunciamientos en La Coruña, Barcelona, Zaragoza y Pamplona y, el 7 de marzo, Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución y nombrar un Gobierno liberal. Todo había sido obra de un pequeño grupo de oficiales mientras la mayoría del ejército y el pueblo contemplaban apáticamente los hechos. El pronunciamiento quedó acreditado como





Página izquierda, Rafael del Riego, pronunciado en Cabezas de San Juan. Página derecha, arriba, el general Mina y sus seguidores se internan en Francia; abajo, fusilamiento del general Lacy (grabados de Serra, siglo XIX)

instrumento político en una realidad inerte.

El régimen constitucional de 1820 no se vio amenazado por los militares absolutistas hasta que, en 1822, se alzó la Guardia Real, tropa de élite donde servían como oficiales muchos aristócratas. Un teniente liberal, Mamerto Landáburu, fue asesinado por los soldados y un grupo de tenientes conservadores, encabezados por Luis Fernández de Córdoba, se pronunció con seis batallones para pedir una reforma constitucional moderada. Los alzados, tras algunas maniobras, marcharon el 7 de junio sobre Madrid donde fueron derrotados al día siguiente por la Milicia Nacional y la postura constitucionalista del general Pablo Morillo.

Sin embargo, muchos oficiales estaban molestos ante el ascenso de sus compañeros revolucionarios. En una pugna por las ideas y la promoción, el ejército se escindió en absolutistas y liberales, gratificados y postergados, y se plagó de miembros de sociedades secretas, masones y comuneros. Cuando una tropa de soldados franceses y absolutistas españoles, llamada los Cien Mil Hijos de San Luis, entró en Espana para reponer los derechos absolutistas de Fernando VII, los militares, divididos, no opusieron resistencia y en su mayor parte los generales cambiaron de bando o se rindieron.

Una vez restaurado como rey absoluto, Fernando VII disolvió un ejército que no le parecía fiable y, confiado en el apoyo de las fuerzas francesas de ocupación, únicamente mantuvo en armas a los guardias de corps, el regimiento de infantería número uno, dos regimientos suizos y los Voluntarios Realistas, una milicia absolutista, creada como policía política que pronto degeneró en agrupación de *enchufados*.

Soldados para un nuevo poder

Sin embargo, el rey reconstruyó el ejército cuando se sintió amenazado

simultáneamente por la izquierda liberal y la derecha ultraapostólica, que cortejaba a su hermano don Carlos. Fue 1824 un año de sobresaltos: Valdés, un coronel liberal, se apoderó de Tarifa; y se sublevó el brigadier Capapé, instigado por don Carlos; la reorganización militar tomó impulso y perdió progresivamente rigor la depuración de los oficiales que habían servido a los constitucionalistas entre 1820 y 1823. Al año siguiente, alzamientos de distinto signo demostraron que el Estado no podía sobrevivir sin fuerza armada y se aceleró la reconstrucción del ejército, aunque con tal improvisación y carencia de medios que resultó débil, anticuado y pésimamente equipado.

Desde 1825, la depuración militar se orientó contra los liberales exaltados y los absolutistas puros; los oficiales cobraron regularmente sus sueldos y fueron tratados con consideración. Fernando VII simultaneaba ministros aperturistas como López Ballesteros y el duque del Infantado con la ferocidad contra los disidentes, tanto de derechas como de izquierdas; ello pareció exacerbar los ataques apostólicos y el régimen incrementó sus estímulos a la lealtad del ejército. Cuando Mina, alentado por la revolución francesa de 1830, entró en armas a través de los Pirineos, pudo comprobar cómo la política militar del Gobierno daba resultado y malograba sus intentos, hasta que desistió y regresó a Francia. En vista de ello, en 1833, el Gobierno concedió a los capitanes generales poderes ilimitados para eliminar toda oposición y autorizó una Milicia Urbana, pagada y mandada por los burgueses liberales, para sustituir a los Voluntarios Realistas, que fueron desarmados sin otra resistencia notable que los batallones de León, vencidos tras un conato de desobediencia. Cuando el 18 de septiembre de 1833 murió Fernando VII, el Gobierno de María Cristina disponía de un ejército en el cual apoyarse para mantener la seguridad del trono. Pero los militares habían adquirido poder propio y frustraron los propositos de la regente y su ministro Cea Bermúdez, que no iban más allá de contener las pretensiones de don Carlos y practicar una política asimilable al despotismo ilustrado.

En 1834, el Gobierno comprobó el peso de las coacciones militares cuando Quesada, capitán general de Castilla la Vieja, y Llauder, capitán general de Cataluña, hicieron llegar memoriales a la reina, que se vio obligada a sustituir a Cea por el moderado Martínez de la Rosa y, en abril de 1834, a promulgar el Estatuto Real.

Moderados y progresistas

Durante la guerra carlista el ejército y la Milicia Urbana se convirtieron en protagonistas políticos, y el moderantismo de Martínez de la Rosa fue desbordado por dos pronunciamientos progresistas. El primero en Madrid, el 18 de enero de 1835, donde se alzó el teniente Cayetano Cordero, miembro de la sociedad secreta militar *La Isabelina,* reclamando la Constitución de 1812. Aunque los sublevados fracasaron y se enemistaron con la guarnición al dar muerte al capitán general José Canterac, les favoreció la actitud de la milicia y pudieron rendirse sin otras consecuencias que marchar destinados al frente del Norte.

En septiembre de 1835, el progresista Mendizábal formó Gobierno y fue atacado en las Cortes por la suma de los conservadores hasta que, en mayo de 1836, María Cristina lo sustituyó por el moderado Istúriz. Los progresistas respondieron con varios pronunciamientos fracasados hasta agosto de 1836. Custodiaban entonces el palacio de La Granja, donde veraneaba la corte, unidades de la Guardia Real recién vueltas de la guerra del Norte. Sus sargentos, convertidos al progresismo en la lucha contra los carlistas, estaban agitados por reivindicaciones profesionales y los rumores de una inmediata disolución de la Milicia. El 12 de agosto, Mendizábal y Calatrava logra-



Tropas sublevadas y paisanos en Barcelona, 1840 (litografía de Alaminos, siglo XIX)

ron que un grupo de sargentos y cabos irrumpiera en Palacio y obligara a María Cristina a restaurar la Constitución de 1812 y designar un Gobierno progresista en la presidencia y con Mendizábal en Hacienda.

El ejército, protagonista

La fuerza política que la guerra prestaba a los militares se agudizó desde 1837, cuando la administración civil se reveló incapaz de abastecer a los ejércitos en campaña y los generales hicieron valer sus condiciones. Los problemas de la intendencia se convirtieron en grave cuestión de Estado y Espartero, general en jefe del ejército del Norte, condicionó a los sucesivos Gobiernos con exigencias de nuevos recursos.

El poder militar de la guerra era tan manifiesto en 1838 y 1839 que los liberales se alzaron en Sevilla, en un oscuro pronunciamiento contra el reaccionario general Clonard, y, en el mismo campo carlista, se enfrentaron el general Maroto, militar de carrera, y Tejeiro, jefe de los clericales absolutistas y los generales navarros, hasta que el primero dio un golpe, fusiló a algunos de sus enemigos y, para evitar la venganza, pactó con Espartero el final de la guerra, sin autorización de don Carlos.

La contienda armada terminó el 31 de agosto de 1839 por decisión de Espartero y Maroto; en ambos bandos, los generales habían decidido el futuro del Estado y Espartero era el hombre fuerte de los vencedores, apoyado por los veteranos del ejército del Norte, mientras el partido progresista basaba su poder en la Milicia, verdadero ejército privado de los alcaldes. En 1840, un proyecto de ley municipal pretendió poner la designación de éstos en manos de la Corona, y los progresistas se sintieron amenazados. En septiembre, los ayuntamientos y la Milicia de Barcelona y Valencia organizaron manifestaciones de protesta y Espartero se negó a emplear sus tropas contra ellos. La combinación de la rebeldía civil y la inhibición militar obligó a María Cristina a llamar a Espartero, con la intención de nombrarle primer ministro,

pero el general no aceptó y la obligó a abandonar la regencia y España.

El Ayacucho (1841-1843)

Exiliada la reina madre, Espartero, *El Pacificador* y duque de la Victoria, ocupó el puesto de regente y los progresistas se echaron en manos de su general que, apoyado en los *ayacuchos,* Linaje, Van Halen, Seoane, Zurbano, sus antiguos compañeros de armas en la campaña de América, dominaba el ejército, aunque muchos oficiales no políticos estaban disgustados por la alianza con los progresistas más radicales, que exigían economías militares.

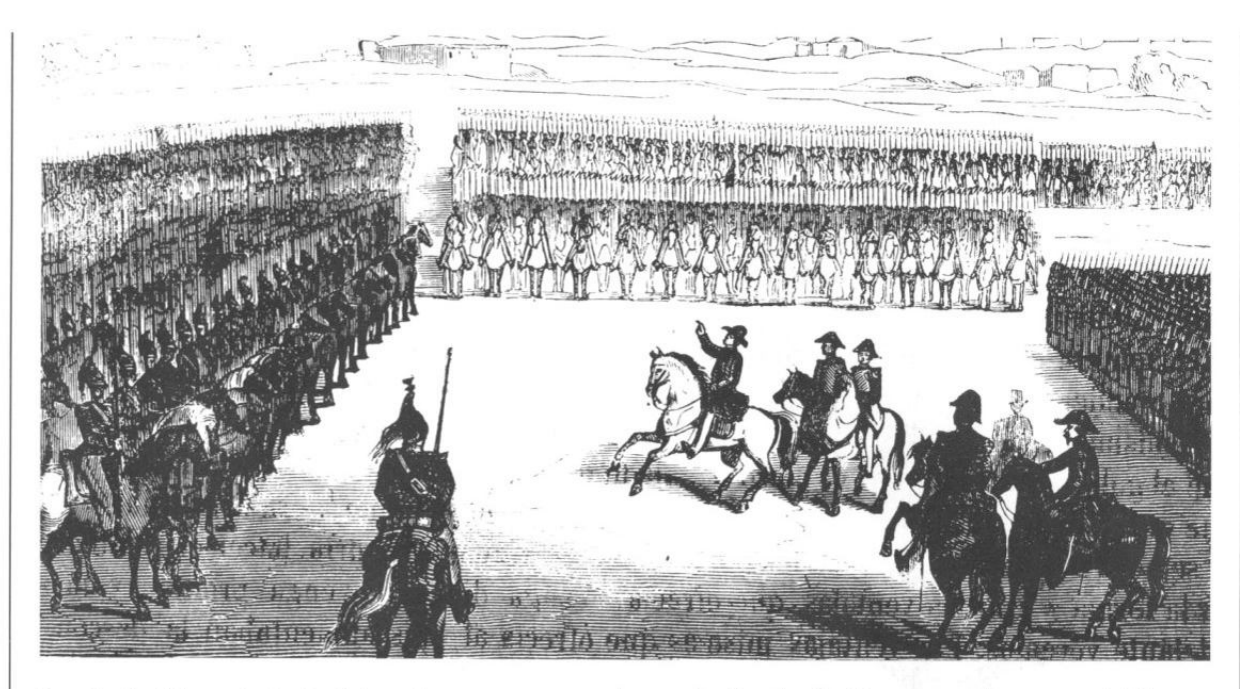


Los moderados intentaron recuperar el poder mediante un pronunciamiento. En 1841 una conspiración, estimulada por Luis Felipe de Francia, María Cristina y O'Donnell, puso en marcha el movimiento con los generales Concha, Pezuela, Narváez, Montes de Oca, Diego de León y Borsi di Carminati, que terminó en el fracaso y fusilamiento de los tres últimos. Muchos oficiales consideraron desmesurado el castigo, que desprestigió a Espartero, cuya popularidad entre la tropa también se erosionó a causa del atraso de las pagas. Mientras, en el exilio, María Cristina financiaba una sociedad secreta, organizada por Narváez y presidida por O'Donnell, la *Orden Militar Española,* cuyas finalidades estatutarias eran *restablecer y sostener constantemente la disciplina, defender las instituciones del Estado y dar al trono fuerza y esplendor, circunstancias todas indispensables para la existencia de la monarquía.*

El autoritarismo de Espartero acabó por erosionar uno de los centros del poder progresista que era Barcelona, donde su política no satisfacía ni a los patronos ni a los obreros. En noviembre y diciembre de 1842 se originó un movimiento popular y republicano, al que se unieron los soldados del regimiento Guadalajara, quejosos por las muchas pagas atrasadas, y se hizo cargo de la revuelta una *Junta popular directiva provisional,* compuesta por artesanos sin participación de la burguesía ni del proletariado.

Cuando Espartero reaccionó, tomaron el poder en Barcelona los progresistas de orden con una nueva *Junta de gobierno* que disolvió la *Junta popular* anterior y licenció a los últimos milicianos incorporados. Pero la cerrazón del regente le impidió entenderse con la nueva junta y prefirió bombardear la ciudad en diciembre, manteniéndola bajo la ley marcial hasta febrero de 1843. El mismo partido progresista se le enfrentó parlamentariamente y algunos militares se unieron a la campaña de la izquierda contra el general. En mayo de 1843 el sentimiento de *todos contra los ayacuchos* fue aprovechado por la Orden Militar Española para favorecer varios pronunciamientos en Andalucía, culminados el 17 de julio en Sevilla.

La oposición a Espartero condujo a los radicales de Barcelona, el ala izquierda del partido y los generales progresistas a una alianza suicida con la conspiración moderada de Narváez. Los pronunciamientos combinados de Prim y Milans del Bosch en Reus, Narváez, Concha, Pezuela y Fulgorio en Valencia y Serrano en Barcelona desestabilizaron al Gobierno, pero Narváez se hizo dueño del movimiento al ponerse al frente de un ejército con el que se enfrentó en Torrejón a los gubernamentales, que llevaban meses sin cobrar y desertaban a diario. Espartero se exilió a Inglaterra y Prim fue nombrado conde de Reus para premiar su participación en el pronuncia-



Izquierda, Diego de León, héroe de guerra, golpista y fusilado; arriba, pronunciamiento de O'Donnell, 1853

miento que alejó a su partido del Gobierno durante diez años.

El *Espadón de Loja* (1843-1854)

Vueltos los moderados, desarticularon las bases del poder progresista: anularon los ascensos concedidos por Espartero, disolvieron la Milicia, legislaron el nombramiento gubernativo de los alcaldes y fundaron la Guardia Civil para mantener el orden. Narváez, a quien sus enemigos llamaban el *Espadón de Loja,* controló férreamente a los militares sin permitir injerencias de los ministros civiles en los cuarteles. Su política de *paga y vara* configuró un ejército obediente, depurado de esparteristas, pagado con puntualidad, sujeto a una disciplina rigurosa y sometido a continuos ejercicios de instrucción y parada. Los militares leales participaron en las prebendas y en las instituciones políticas hasta el punto que en 1853, 93 de los 314 senadores eran generales.

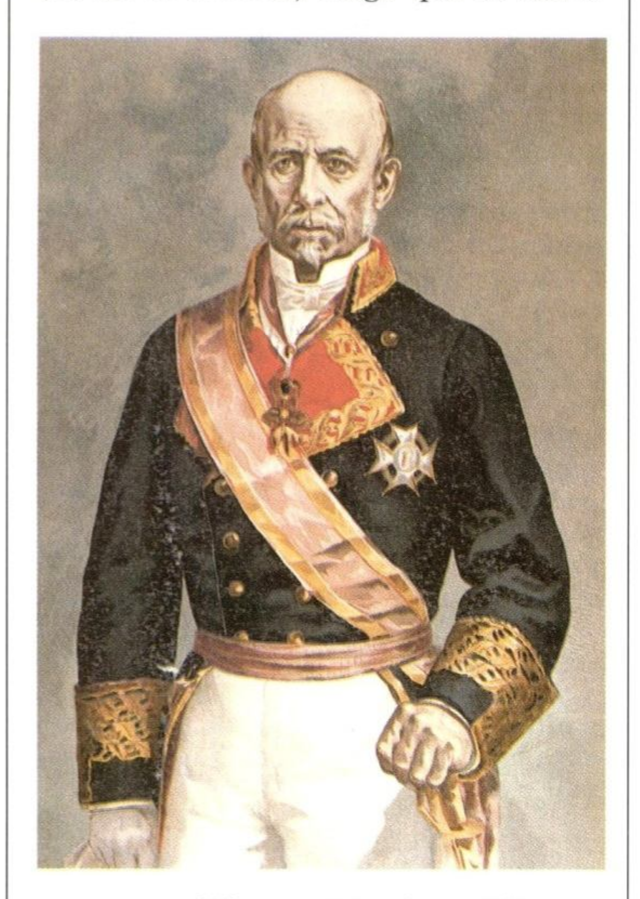
Vetada cualquier posibilidad de alcanzar el poder mediante las elecciones o la designación real, no quedó a los progresistas otro camino que los pronunciamientos. Fracasaron sucesivamente algunos de poca entidad como el de 1844 encabezado por Pantaleón Bonet en Alicante o el de Zurbano en 1845. En 1846 se alzó el coronel Solís, con parte del regimiento de Zamora, de guarnición en Lugo, y los progresistas locales. Su movimiento se extendió y el 15 de abril creó en Santiago una junta superior de gobierno de Galicia, que añadió a los planteamientos progresistas clásicos la protesta contra los impuestos de Mon, aunque fracasó poco después.

Tampoco tuvieron éxito las acciones republicanas provocadas en España por la revolución francesa de 1848 que consistieron principalmente en el movimiento de marzo en los suburbios madrileños, la revuelta estudiantil del mes siguiente y, en mayo, un motín de poca trascendencia a cargo de los sargentos del regimiento España que ocupan la plaza Mayor, arengados por un oficial retirado.

Un enfrentamiento entre Sartorius, conde de San Luis, y O'Donnell generó, a partir de 1853, una nueva línea de la política militar, que se radicalizó hasta el arresto y posterior exilio de O'Donnell y sus amigos. Aunque en 1854 fracasó un pronunciamiento progresista en Zaragoza, el desgaste moderado era evidente: a consecuencia de la guerra de Crimea, el Gobierno había facilitado la exportación de trigo a Inglaterra y provocado una gran alza de precios. El malestar popular y la oposición política, militar y civil, concurrieron al fin. En junio tuvo lugar la *Vicalvarada,* un pronunciamiento del conservador general Dulce al que se unió O'Donnell, cuyo combate del 28 contra los gubernamentales en Vicálvaro resultó indeciso. La situación parecía favorable al Gobierno cuando el 6 de julio intervinieron los

políticos civiles con el *Manifiesto de Manzanares,* redactado por Cánovas, que ofrecía a los progresistas restablecer la Milicia. El malestar popular cristalizó entonces en levantamientos desde el día 17 en San Sebastián, Valladolid y Valencia; en Madrid fueron asaltados los palacios de Sartorius, Salamanca y María Cristina; en Barcelona las protestas incluyeron la oposición a las selfactinas*, la petición de sociedades obreras y la negociación salarial.

Ante la crisis, Isabel II llamó a Espartero, que aceptó formar Gobierno y salvó la dinastía. Pero el general había pasado demasiados años apartado del ejército y sus amigos ya no eran militares en activo. El poder estaba en manos de un nuevo espadón, O'Donnell, a quien Espartero debió nombrar ministro de la Guerra, cargo que le sirvió



para consolidarse entre los militares, de manera que la reina le entregó el poder en 1856, cuando sus discrepancias con Espartero fueron insalvables. La Milicia, fiel a su tradición, se movilizó, pero la abandonaron los mismos políticos progresistas.

Desde 1856 a 1863, la política de O'Donnell y su Unión Liberal chocó escasamente con los militares. Poco dogmáticos, los unionistas contaron con civiles de variadas ideologías como Ríos Rosas, Alonso Martínez o Mon, emprendieron expediciones militares a Cochinchina, Santo Domingo, México, derrotaron al sultán de Marruecos y despertaron la confianza del ejército. El pronunciamiento carlista de 1860 no fue importante y sólo se debió a la voluntad de Jaime Ortega, capitán general de Baleares, que trasladó sus fuerzas secretamente en barco a Tortosa, donde pronunció una inesperada arenga carlista que le costó el ridículo, la defección de sus hombres y el fusilamiento. La caída de O'Donnell en 1863 nada tuvo que ver con la situación militar, sino que se debió a la ruptura con los hombres de su propio partido.

** Anglicismo utilizado para designar a las máquinas de hilar intermitentes y automáticas.*

La ascensión de Prim a espadón progresista

El último período moderado estuvo tutelado por Narváez y coincidió con intentos de los progresistas y también de los demócratas, organizados como partido en los años sesenta, que extraían su fuerza del contacto con el proletariado urbano pero también confiaban en la fuerza de las bayonetas, aunque sin buscar el concurso de los generales, sino el de los oficiales jóvenes y sargentos, inquietos por las malas pagas, y el de los soldados, prisioneros del sistema de quintas.

Por su parte, los progresistas recurrieron a los pronunciamientos, una y otra vez, gracias a la tenacidad y la energía de Prim, que fracasó en 1864 con el regimiento Saboya y, en 1865, con las guarniciones de Pamplona y Valencia. Ambos fracasos demostraron, sin embargo, que se había deteriorado el poder de Narváez y que su sable ya no bastaba para garantizar la estabilidad de los cuarteles.

El poder del *Espadón de Loja* en el ejército era todavía importante pero no absoluto, e Isabel II lo cesó para jugar la carta de O'Donnell, apuesta para neutralizar los pronunciamientos progresistas mediante una apertura a la izquierda. Pero el incansable Prim organizó, en 1866, la insurrección de Villarejo preparada para estallar en Aranjuez, Avila, Alcalá y Ocaña, que también fracasó, obligándole a refu-



Izquierda, Ramón M.ª Narváez, el *Espadón de Loja*; arriba, lucha en las calles de Madrid durante la sublevación del cuartel de San Gil, en 1866

giarse en Portugal. Esto le convenció de la necesidad de aumentar la base de la conspiración mediante un pacto antidinástico con los demócratas, peligro que O'Donnell quiso neutralizar endureciendo su gobierno.

Los preparativos conspiratorios afloraron en la sublevación del cuartel madrileño de San Gil, el 22 de junio de 1866. Las reivindicaciones de los sargentos de artillería, que tenían vedado el ascenso a oficiales, la propaganda demócrata y el aliento de algunos oficiales progresistas produjeron un pronunciamiento que ocasionó la muerte de algunos jefes y oficiales. El alzamiento fue mal apoyado por las barricadas civiles y se estancó en el cuartel de San Gil, sin extenderse a otros regimientos hasta que el unionista general Serrano lo redujo por la fuerza. Su violento desenlace y el fusilamiento de cuarenta sargentos, destruyeron la imagen tolerante y el prestigio de O'Donnell. Isabel II llamó nuevamente a Narváez.

El *Espadón de Loja* gobernó, unido a González Brabo, hasta su muerte, en julio de 1867. González Brabo quedó solo ante el poder militar. Cuando, en noviembre del mismo año, murió también O'Donnell, temiendo que sin la moderación de su antiguo jefe se pronunciaran los generales unionistas, se les adelantó: en julio de 1868 desterró a Serrano, Dulce, Zabala, Córdoba y Echagüe porque sospechó que conspiraban con Montpensier.

Principales pronunciamientos militares

1814	Elío	Valencia	Restauración absolutista
1814	Mina	Pamplona	(F) liberal
1815	Porlier	Galicia	(F) liberal
1816	Richart	Madrid	(F) liberal
1817	Lacy	Caldetas (Barcelona)	(F) liberal
1819	Vidal	Valencia	(F) liberal
1820	Riego	Cabezas de S. Juan	Trienio constitucional
1822	Fdez. de Córdoba	Madrid	(F) conservador
1824	Capapé	Zaragoza	(F) realista
1824	Valdés	Tarifa	liberal
1825	Bessières	Getafe	(F) realista
1826	Hnos. Fernández-Bazán	Alicante	(F) liberal
1830	Torrijos	Málaga	(F) liberal
1830	Mina	Pirineo	(F) liberal
1835	Cayetano Cardero	Madrid	(F) progresista
1835	Quesada	Madrid	(F) progresista
1836	García, Gómez y Lucas	La Granja	Gobierno progresista
1838	Fdez. de Córdoba	Sevilla	(F) complejo
1841	O'Donnell, Concha, Narváez	Madrid y Zaragoza	(F) moderado
1843	Narváez, Prim	Reus, Valencia	Caída Espartero
1844	Pantaleón Bonet	Alicante y Cartagena	(F) progresista
1846	Miguel Solís	Lugo	(F) progresista
1848	José Fulgosio		(F) progresista
1854	Hore	Zaragoza	(F) progresista
1854	O'Donnell, Dulce	Vicálvaro	Caída Narváez
1860	Ortega	Tortosa	(F) carlista
1864	Prim	Regimiento Saboya	(F) progresista
1865	Prim	Pamplona y Valencia	(F) progresista
1866	Prim	Alrededores de Madrid	(F) progresista
1866	Sargentos	Cuartel de San Gil	(F) progresista
1867	Prim, Moriones		(F) progresista
1868	Prim, Serrano, Topete	Cádiz	Caída Isabel II
1871	Soldados	El Ferrol	(F) federalista
1874	Pavía	Madrid	Fin I República
1874	Martínez Campos	Sagunto	Restauración monárquica
1883	Serafín Asensio	Badajoz	(F) republicano
1884	Ferrándiz	Sta. Coloma (Gerona)	(F) republicano
1885	Gallego	Cartagena	(F) republicano
1886	Casero	Cartagena	(F) republicano
1886	Villacampa	Madrid	(F) republicano
1923	Primo de Rivera	Barcelona	Dictadura
1929	Sánchez Guerra	Ciudad Real	(F) antidictadura
1930	Galán	Jaca	(F) republicano
1930	Queipo, R. Franco	Cuatro Vientos	(F) republicano
1932	Sanjurjo	Madrid, Sevilla	(F) monárquico
1936	Sanjurjo, Mola		Guerra civil
1981	Tejero, Milans	Madrid, Valencia	(F) franquista

(F) = fracaso

Republicanos y monárquicos

Desde que la oposición a Isabel II firmó el Pacto de Ostende en 1866, Prim quedó en inmejorable posición. Como presidente del Comité Revolucionario dominaba la coalición antidinástica de progresistas, demócratas y federales, pero consideraba que únicamente podía derribar a la reina con un pronunciamiento militar, no subordinado a los acuerdos con los demócratas y progresistas civiles, a quienes culpaba del fracaso de los anteriores intentos.

La crisis económica, el alza de precios, el paro, la pérdida de beneficios, el desprestigio de la reina y la intransigencia del Gobierno favorecieron la conspiración militar a la que se sumaron los marinos, irritados por la suspensión del proyecto de construcciones navales. El pronunciamiento de 1868 fue iniciado por el montpensierista almirante Topete, seguido por los militares progresistas de Prim y los unionistas de Serrano con toda la liturgia de los pronunciamientos, sin faltar un manifiesto: *España con Honra.*

Un poder descabezado

La partida se decidió con la derrota del ejército gubernamental en Alcolea el 28 de septiembre; los generales de la reina no ofrecieron resistencia, afirmaron no estar dispuestos a *dividir el ejército* y el marqués del Duero entregó el mando militar de Madrid sin buscarse más complicaciones.

Prim, el espadón del progresismo, respaldado políticamente por el ejército, aseguró la nueva situación donde el unionista Serrano gozaba de un poder mucho menor. El Gobierno central revolucionario necesitó contar con los militares para enfrentarse al independentismo cubano, los movimientos revolucionarios de 1868 en Andalucía, el alzamiento federalista de 1869 en Aragón, Cataluña y Levante y el motín de soldados y federalistas de El Ferrol en octubre de 1871. Prim, hombre clave del poder resolutivo, impuso la monarquía como forma de Estado y a Amadeo de Saboya como rey de España. Pero cuando el príncipe llegó a Madrid, el asesinato de Prim había volatilizado el poder estabilizador y ningún otro general era capaz de ocupar su puesto.

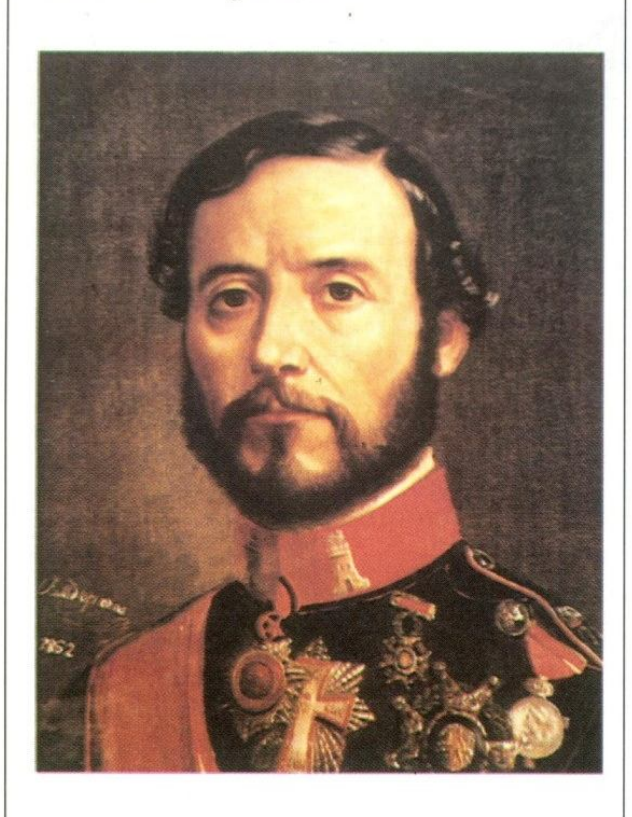
En 1873 el Gobierno progresista de Ruiz Zorrilla nombró al general Baltasar Hidalgo jefe del ejército de Norte pero los manos de artillería se negaron a obedecerle, acusándolo de haber incitado el pronunciamiento de sargentos del cuartel de San Gil en 1866. Ante el plante, aún sin contar con generales carismáticos, el Gobierno fue capaz de disolver el cuerpo de artillería y relevar a los oficiales por suboficiales recién ascendidos. Ante la evidente debilidad de su posición, Amadeo I, cansado de las disputas internas, abdicó y abandonó España.

En abril de 1873, los republicanos radicales iniciaron un pronunciamiento contra los federales y cuando el marqués de Sardoal concentró a las unidades más conservadoras de la Milicia en la plaza de toros, Pi i Margall, ministro de la Gobernación, reunió a los voluntarios de la libertad y a los generales adictos y ordenó bombardear el coso. La Milicia se disolvió, Serrano huyó a Francia y Topete fue arrestado.

El declinar del militarismo de partido

Los oficiales sentían una creciente indignación ante las experiencias revolucionarias antimilitaristas, las polémicas sobre las quintas, los motines de soldados y los amagos de sustituir el ejército por cuerpos de milicias. Un *apolítico* sentimiento de defensa corporativa se densificó en los cuartos de banderas, en coincidencia con el deseo

de estabilidad de gran parte de la clase media, cada vez más dispuesta a pactar con la aristocracia y la alta burguesía para acabar con una revolución que no había sabido dirigir. Desde que las mejores unidades del ejército abandonaron sus guarniciones para marchar a la guerra carlista del Norte, quedaron establecidas las condiciones para la rebeldía cantonalista. La crisis militar se produjo cuando el partido federal, centro de las campañas antiquintas, llegó al poder; localmente se restauraron los voluntarios de la libertad, que habían sido disueltos en 1869, las deserciones, los motines de soldados y asesinatos de oficiales se extendieron en el ejército.



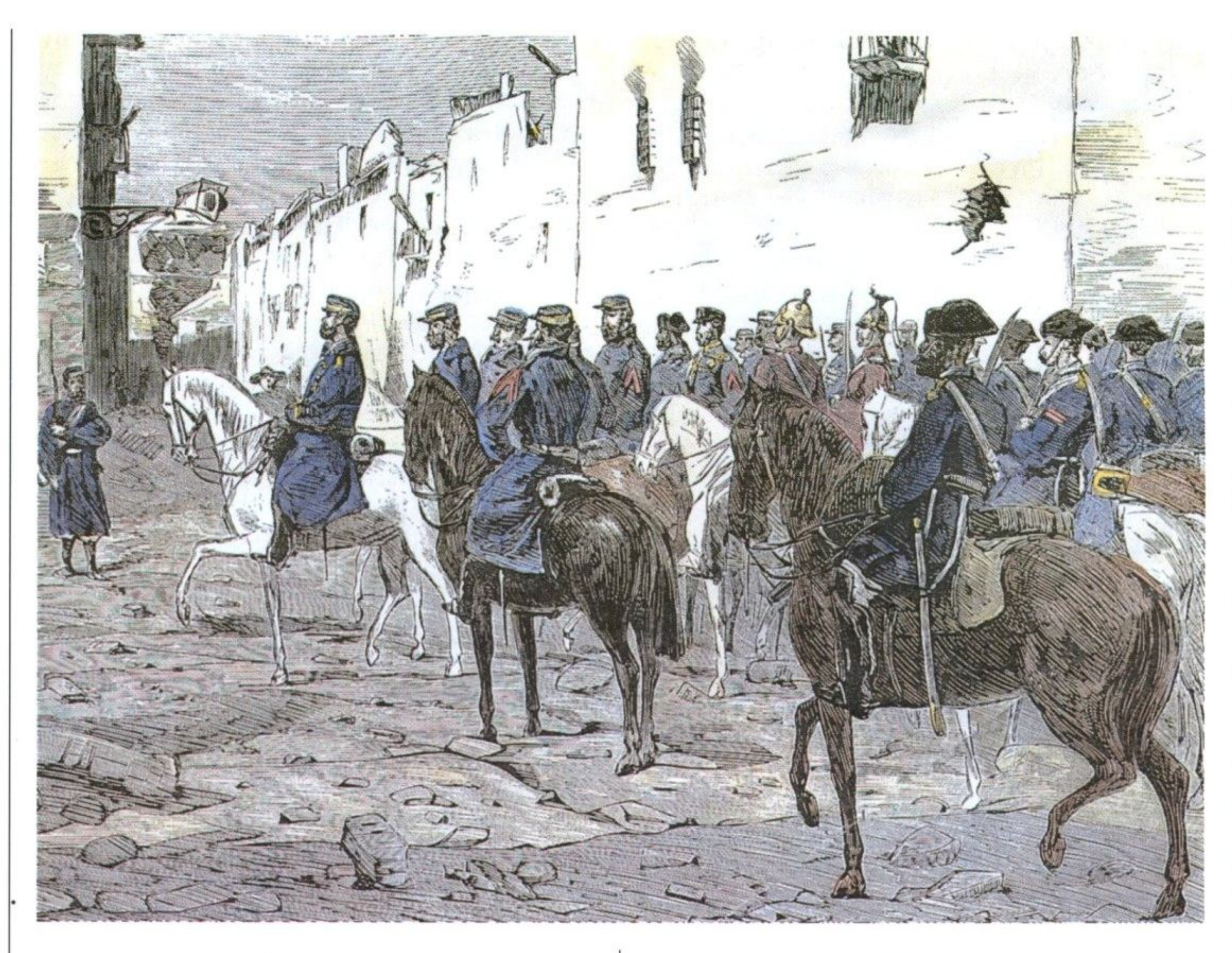
El 11 de junio de 1873 se proclama la República Federal. Pi i Margall es su primer presidente.

Cuando éste dimitió un mes más tarde, le sucedió Salmerón, mientras numerosas ciudades se proclamaban cantones independientes. El nuevo presidente, dispuesto a restaurar la autoridad del Gobierno central, recurrió a los generales y confió los mandos principales al antifederal Pavía y el monárquico Martínez Campos. El ejército redujo la revuelta en 15 días: Pavía derribó los cantones de Sevilla, Cádiz y Granada; Martínez Campos tomó Valencia tras un bombardeo; únicamente Málaga y Cartagena resistieron ante los soldados del poder central.

Pero Salmerón estaba sujeto a complicados compromisos; el mismo Solier, líder del cantón malagueño, era un protegido de Palanca, el ministro de Ultramar. La opinión militar pedía el restablecimiento de la pena de muerte para ir a combatir a los carlistas y Pavía acosó a Salmerón para que le permitiera tomar Málaga, amenazándole con dimitir en caso contrario. Con tres guerras a la vista, el ejército estaba carcomido por el descontento, la pugna con el antimilitarismo federal había irritado a los mandos y muchos soldados se negaban a obedecer. Los oficiales del ejército de Cataluña recogieron 1.200 firmas que apoyaban el restablecimiento de la pena de muerte y las Cortes accedieron a su petición. Salmerón, que acababa de nombrar capitán general de Madrid a Pavía, dimitió.

Castelar, el nuevo presidente, buscó el apoyo de las clases conservadoras y, catorce días después de llegar al poder, suspendió las Cortes. Desde el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de enero de 1874 gobernó como un verdadero dictador; suspendió las garantías constitucionales, disolvió el ayuntamiento de Madrid, clausuró la prensa extremista, restauró la pena de muerte, rehabilitó a los artilleros suspendidos por el *asunto Hidalgo* y empleó en la guerra carlista y cantonallsta a generales no republicanos pero eficaces, que contaban con el apoyo de los oficiales. Así logró la confianza del ejército, el apoyo de Serrano, Topete, Pavía, Martínez Campos y acabó convertido en la esperanza de la derecha y el enemigo de la izquierda. Los militares habían descubierto que las trifulcas entre partidos les perjudicaban y que una política de *unidad del Ejército* era la mejor defensa frente al antimilitarismo federal.

Pavía estaba decidido a impedir el retorno al desorden, los ataques al ejército y especialmente contra la artillería, su propio cuerpo. No era el hombre fuerte de un partido político como Prim, Espartero, Narváez u O'Donnell, sino un artillero antiisabelino del 68, ahora enfrentado políticamente a los federales, al coincidir con los republicanos radicales. Presionó a Castelar para que mantuviera suspendidas las sesiones de las Cortes y, como el presidente no se mostró dispuesto a acceder, le advirtió que su derrota parla-



Izquierda, general Juan Prim y Prats. Arriba, el general López Domínguez entra en Cartagena tras obligar a capitular a los sublevados cantonales, el 30 de enero de 1874

mentaria supondría un nuevo quebranto para el ejército.

Un pretorianismo de transición

Cuando Castelar fue derrotado en las Cortes el 3 de enero de 1874, por 120 votos contra 100, Pavía puso en acción las tropas de Madrid que había desplegado cautelarmente y cuando supo, aún sin acabar el escrutinio, que el futuro presidente sería Palanca, un federalista de la línea de Pi i Margall, ordenó que sus hombres disolvieran el Parlamento. La operación se hizo sin violencia y, una vez clausurada la asamblea, el general intentó pactar con Castelar, que se negó a entrevistarse con el autor de un golpe y reinstalarse en el poder con su apoyo. No quedó otra opción que un nuevo Gobierno provisional presidido por Serrano.

El pronunciamiento de Pavía se diferenciaba de los históricos, porque el general no era el brazo armado de un partido político, como los espadones tradicionales y, aunque el golpe se dio en beneficio de Castelar, fue dirigido sobre todo contra la política militar de los federales, que disgustaba a la mayoría de los oficiales. Inició la transición hacia el nuevo militarismo apartidista y corporativo: contó con la unanimidad de los militares; buscó contener un proceso estimado como destructor del ejército; fue respaldado por una amplia opinión civil, que se sentía amenazada por la revolución, y no pretendió conceder el poder a un partido político concreto.

También los monárquicos exiliados cuidaban su política militar. Durante el verano de 1873, Cánovas decidió enviar al príncipe Alfonso a la escuela militar inglesa de Sandhurst, y después promovió el manifiesto de este nombre como una maniobra para hacer avanzar la opinión civilista sobre las prisas de los generales monárquicos que conspiraban para dar un golpe contra Serrano. El documento, en forma de carta, comenzó a circular desde el 1 de diciembre de 1874 y retrasó un primer intento de Martínez Campos, aunque no pudo impedir que continuara su conspiración.

A principios de diciembre corrió el rumor de que Cánovas estaba en conversaciones con dos generales partícipes de la revolución de 1868: Fernando Primo de Rivera, capitán general de Madrid, y Jovellar, capitán general del ejército del Centro, para obtener su beneplácito a restaurar la monarquía. Los generales de la conspiración alfonsina temieron verse desbordados y presionaron a Martínez Campos, entonces cabeza de los militares monárquicos, para que entrara en acción. El general no tenía entonces mando de tropas por cuyo motivo pactó con Dabán, que estaba al frente de una brigada, y pidió autorización al príncipe Alfonso para sublevarse, pero ultimó los detalles para hacerlo antes de recibir respuesta, alegando que el Gobierno podía atraerse a los coroneles comprometidos, mediante un ascenso.



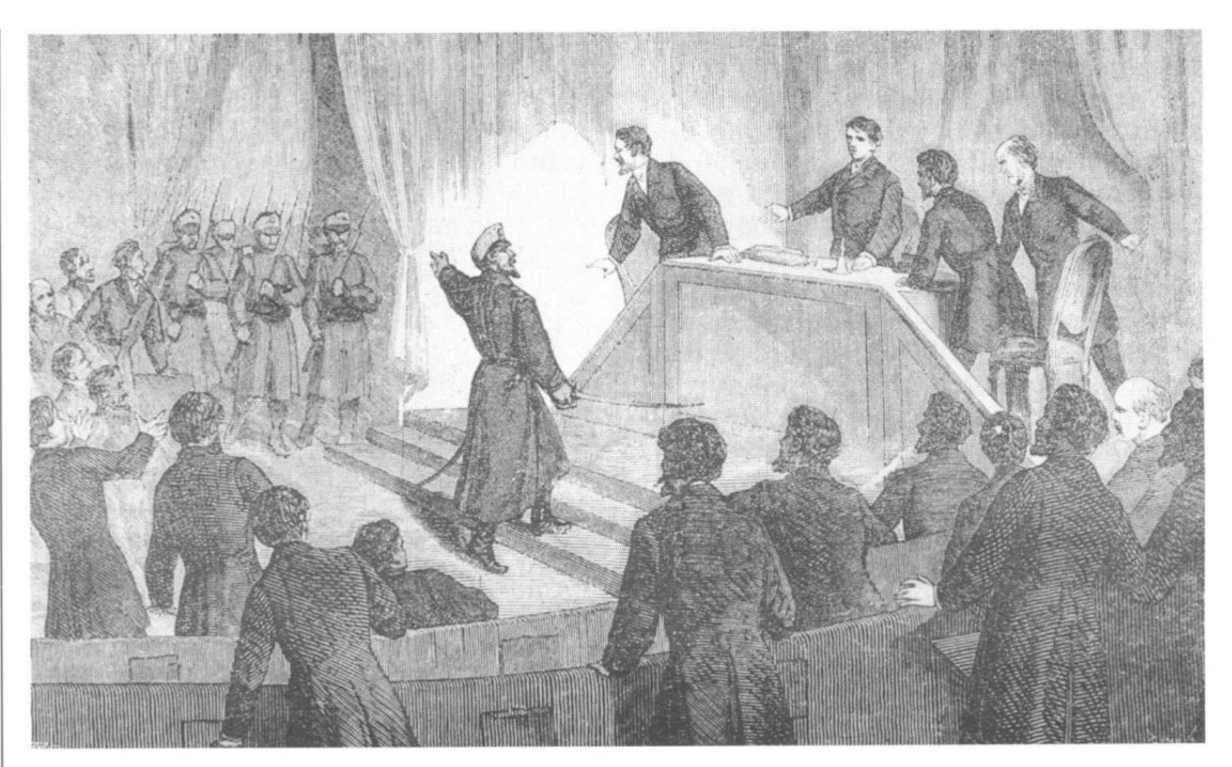
La Restauración y los militares

Contra los deseos de Cánovas, Martínez Campos se pronunció con la brigada de Dabán y proclamó la monarquía de Alfonso XII en Sagunto. Simultáneamente se alzó en Ciudad Real el general Valmaseda con los carabineros, y el general Jovellar, que también estaba en la conjura, reunió fuerzas para apoderarse de Valencia, donde él y Martínez Campos arrestaron a Castillo, el capitán general, que no les secundaba.

El presidente del Gobierno, general Serrano, recibió la noticia camino del Norte, donde se había desencadenado una nueva ofensiva contra los carlistas. Tanto él como el general Moriones y otros jefes estaban decididos a marchar sobre los monárquicos, pero pronto comprobaron que muchos jefes y oficiales no parecían dispuestos a secundarlos. Poco después, Fernando Primo de Rivera, capitán general de Madrid, se pasó a los alfonsinos, convencido de no contar con la guarnición; Serrano se exilió en Francia y Sagasta, entonces ministro, entregó los poderes a Primo de Rivera. Tres generales de la revolución del 68: Jovellar, Laserna y Primo de Rivera habían jugado papeles decisivos en favor de la Restauración monárquica, a la que ninguna unidad armada se opuso.

El nuevo régimen articuló mecanismos para contentar a los militares, como regularizar el pago de los sueldos, incrementar su cuantía y favorecer los ascensos en las graduaciones superiores del escalafón. Pero, sobre todo, gratificó moralmente al ejército. Tras los quebrantos del antimilitarismo federalista, las altas jerarquías castrenses lograron toda clase de distinciones, honores y fueron situadas en lugares preeminentes en las ceremonias públicas que incrementaron la autoestima y el espíritu de cuerpo, hasta el extremo de hipertrofiar la tradicional tentación militar de creerse una elite por encima de los políticos y aún del mismo Gobierno.

Aunque años atrás, la aristocracia se había replegado de la profesión militar, los oficiales conservaban la convicción de ser aristócratas y se comportaban como tales en sus cuarteles y casinos, a pesar de sus bajos sueldos y los largos años perdidos en grados subalternos. Los componentes conservadores de su mentalidad resultaron reforzados en un momento que su grupo social estaba muy configurado y dependía del autorreclutamiento, pues las filas habían dejado de ser un camino para la ascensión de los pobres hasta el generalato. La carrera de los soldados terminaba en sargento y la supresión de las milicias y cuerpos de voluntarios eliminó la posibilidad de



Izquierda, general Manuel Pavía; arriba, el coronel Iglesias, obedeciendo al general Pavía, ordena desalojar el Congreso el 3 de enero de 1874

que las clases populares llegaran a las escalas de oficiales.

Otro elemento estabilizador fue el agotamiento demográfico de la generación de grandes generales políticos que obtuvieron fama en las guerras carlistas o de Africa: Prim había muerto en 1871; Concha en 1874 y Espartero les sobrevivió hasta 1879 y Serrano hasta 1885, pero ni uno ni otro conservaban posibilidades políticas y, mucho antes de morir, ya eran recuerdos. Sus sucesores en el mando, Martínez Campos, Dabán, Jovellar, López Domínguez, Fernando Primo de Rivera, Azcárate, Blanco, Polavieja y Weyler se habían formado durante el Sexenio y conocían los peligros de participar en el juego de los partidos. Especialmente Jovellar y López Domínguez, que habían estado en la revolución del 68, escarmentaron en las experiencias antimilitaristas y se convirtieron en defensores incondicionales del orden representado por el sistema monárquico.

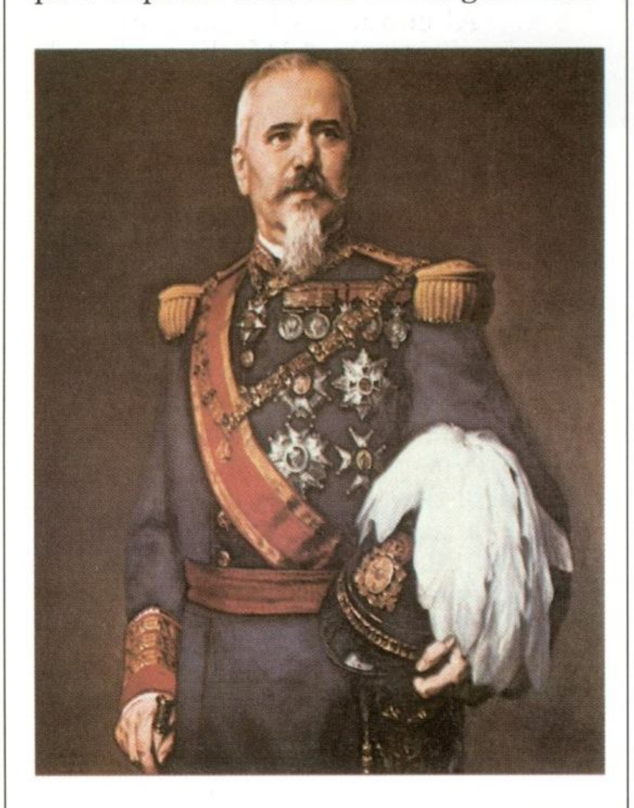
Cánovas procuró desprenderse de los militares republicanos no convertidos a la fidelidad alfonsina. A principios de 1876 los generales Moriones y Pieltain dimitieron, Lagunero e Izquierdo fueron expulsados, Palanca, Socías, Díaz Berrio, Guardia, Padial, Pierrar y Eguía resultaron desterrados en años sucesivos, otros pasaron a la reserva y muchos jefes y oficiales fueron dejados excedentes o enviados a Cuba. En cambio, se permitió la incorporación de los conservadores que habían abandonado el ejército por motivos políticos, restituyéndoles los ascensos, antigüedad y condecoraciones. Una orden del 4 de febrero de 1876 prohibió a los militares participar en la lucha de partidos y una circular del 20 del mismo mes les vetó intervenir en política, con la excepción de los generales que podían ser ministros o miembros de las Cortes, aunque sólo en tiempo de paz. Más tarde se prohibió que los militares publicaran sus peticiones hechas al rey.

El malestar militar

La Restauración contaba con el apoyo de la nobleza y de amplios grupos de la clase media, a la que pertenecían los oficiales. En general, los altos mandos se encontraban cómodos en el nuevo sistema, aunque su situación no fuera ampliable a los militares liberales avanzados y republicanos que permanecían en activo y a muchos oficiales subalternos y sargentos. No fue fácil la integración de los militares disidentes políticos pero enfrió progresivamente su estusiasmo antidinástico el fracaso del republicanismo, abandonado masiva-

mente por las clases medias y sin capacidad para atraerse al proletariado.

En una primera época, el republicanismo militar se benefició de las tensiones provocadas por la disolución del ejército del norte que ocasionó numerosos traslados de oficiales de baja graduación y sargentos de 1877 a 1879. El conservadurismo del sistema y su pacto con los generales impedían combatir el descontento profesional, que se centraba fundamentalmente en las reivindicaciones de las categorías inferiores. El ejército no era un bloque homogéneo sin discrepancias, los celos y las rivalidades, enfrentaban a los cuerpos entre sí, a todos contra el estado mayor y a los sargentos con los oficiales, pero el poder absoluto de los generales contuvo muchas ansias de rebeldía, que el tiempo transformó en conformismo y apatía malhumorada.



Las conspiraciones de Ruiz Zorrilla

Algunos grupos de descontentos hallaron una esperanza en el republicano Ruiz Zorrilla, heredero político de Prim y jefe del partido progresista, que se empeñaba en mantener la tradición del pronunciamiento como método político. Desterrado a Francia por Cánovas el 7 de febrero de 1875, su programa consistía en proclamar una república basada en la Constitución de 1869 y, el 25 de agosto de 1876, publicó un manifiesto republicano contando con el apoyo de los radicales franceses que veían con malos ojos el régimen de Mac Mahon y la monarquía española.

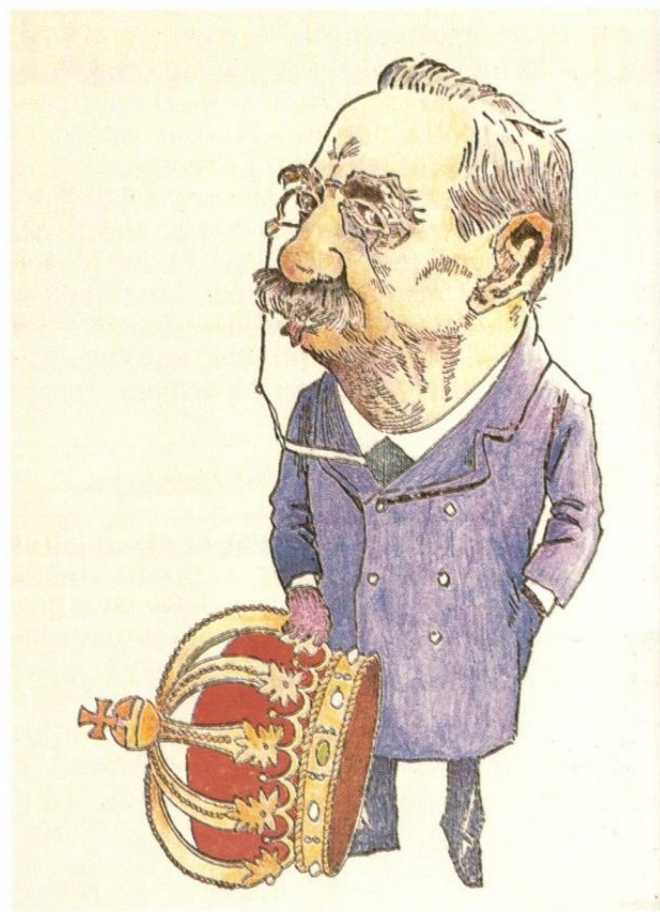
Su primera intentona se frustró en mayo de 1877, cuando varios generales exiliados partieron de París con instrucciones de penetrar secretamente en España y sondear las guarniciones. Su viaje resultó inútil y regresaron decepcionados a Francia donde, durante algún tiempo, aún mantuvo Ruiz Zorrilla la esperanza de atraerse a los generales del interior, hasta que orientó su proselitismo hacia los oficiales y sargentos, sin comprender el cambio que afectaba a los militares españoles y la insensatez de que un político civil pretendiera llenar el vacío dejado por los espadones del siglo XIX, que ya Cánovas había taponado con Alfonso XII.

En 1881, Ruiz Zorrilla intentó aunar las diversas fuerzas republicanas y se reunió en Biarritz con Salmerón, Martos, Montero Ríos y Azcárate, pero sus métodos revolucionarios y su fe en el pronunciamiento fueron rechazados, de manera que quedó políticamente aislado y su poder reducido a sus vinculaciones con la *Asociación Militar Republicana,* una sociedad secreta militar, nacida en octubre de 1880, por el empeño personal del teniente Miguel Pérez y cuyas reivindicaciones básicas eran un ejército moderno, purgado de burócratas, con servicio militar obligatorio, ascensos para los sargentos e igualdad entre los diversos cuerpos y armas.

Izquierda, general Arsenio Martínez Campos, que restauró la monarquía borbónica tras su pronunciamiento en Sagunto. Derecha, arriba, Antonio Cánovas del Castillo, paladín de la restauración; abajo, general Villacampa, un golpista fracasado que conservó la vida

La *Asociación* y los sargentos

Aunque Miguel Pérez mantenía una estrecha conexión con Ruiz Zorrilla, la *AMR* llevó una vida precaria hasta que, en 1882, fue capaz de preparar una sublevación. Prevista para el 5 de agosto, se retrasó hasta el 10 cuando un fallo de coordinación provocó un pro-





nunciamiento anticipado en Badajoz, al mando del teniente coronel Serafín Asensio. La ciudad cayó inmediatamente en su poder pero los rebeldes perdieron el tiempo, sin que fuera mayor la diligencia gubernamental: la noticia tardó un día en llegar a Madrid, donde fueron necesarios otros dos para formar una columna de 3.000 soldados, 500 caballos y 12 cañones, y la rudimentaria logística del ejército rechinó toda una noche hasta embarcarlos en tres trenes con destino a Badajoz. Cuando llegaron a la ciudad, los sublevados, al saberse solos, habían huido para refugiarse en Portugal.

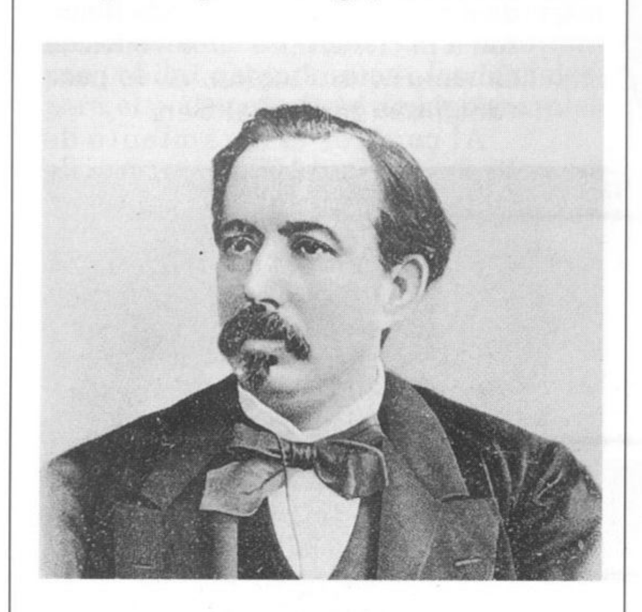
Al conocer el alzamiento de Badajoz, la *AMR* dio orden de sublevación general. En plena confusión, intentó pronunciarse el 8 de agosto el teniente Juan Cebrián, en Santo Domingo de la Calzada, pero un soldado le mató por la espalda. El 9 se alzaron el teniente coronel Fontcuberta y los capitanes Carlos Franco e Higinio Mangado en La Seu d'Urgell, sin poder tomar la fortaleza en la que se había encerrado el brigadier Emilio López de Letona, comandante de la guarnición, hasta que el día 10 Fontcuberta y Franco huyeron a Andorra y Mangado, a Francia.

El fracaso costó a Ruiz Zorrilla la deportación de Francia a Suiza y a la *AMR*, una dura persecución. El día 12 fueron fusilados cuatro sargentos de Santo Domingo de la Calzada y sentenciados a muerte 173 sublevados en Badajoz y miembros de la *AMR*, en su mayor parte en rebeldía, pues muchos estaban exiliados, entre ellos, el fundador Miguel Pérez, que acabó por traicionar a la organización.

Ruiz Zorrilla y la *AMR* decidieron un nuevo levantamiento para el día de las elecciones, 27 de abril de 1884, pero como la conjura fue descubierta y detenidos los generales Velarde, Ferrer, Villacampa e Hidalgo, todo quedó reducido a algunos sabotajes, el paso de la frontera por una partida mandada por el capitán Mangado, que murió en un choque con la guardia civil, y la sublevación

del comandante Ramón Ferrándiz y el teniente Manuel Bellés en Santa Coloma de Farnés (Gerona). Después que una columna gubernamental los capturase, Cánovas se empeñó en fusilarlos a pesar de que el capitán general de Barcelona disintió de la sentencia y las instituciones catalanas protestaron airadamente.

Como expresión del malestar de los sargentos y sin ayuda de la *AMR*, estalló un nuevo pronunciamiento en Cartagena cuando, el 31 de octubre de 1885, el sargento de Infantería de Marina, Enrique Gallego, intentó sublevar la escuadra con ayuda de paisanos. Fracasado, Gallego fue condenado a muerte e indultado.



El 25 de noviembre de 1885 falleció el rey Alfonso XII y la coyuntura pareció favorecer a los conspiradores republicanos. Ruiz Zorrilla y sus partidarios prepararon un nuevo alzamiento, a pesar del aislamiento político en que se encontraban, pues el exilio los hacía desconocer la realidad española, con cuyos líderes republicanos del interior, Salmerón y Pi i Margall, no lograban entenderse. Muy pronto, la acción del embajador español en París, León y Castillo, logró también privarles de los importantes apoyos de que gozaban entre los republicanos franceses.

Entretanto estalló un segundo motín de sargentos y civiles en Cartagena, también desautorizado por Ruiz Zorrilla. El 9 de enero de 1886 el sargento Francisco Casero, del regimiento de la Princesa, con unos 40 paisanos armados, se apoderó del fuerte de San Julián en connivencia con el sargento José Balaguer, perteneciente a la fuerza que guarnecía la fortificación. Cuando el general Fajardo, gobernador militar, se dirigía al fuerte sin apenas escolta, fue muerto por una descarga de los alzados. El fuerte, que no recibió solidaridad ni apoyo exterior, fue atacado por cinco compañías y algunos cañones hasta que, el día 11, los pronunciados huyeron en barco a Orán, excepto un delineante civil del arsenal, llamado Bartual, que fue capturado y pasado por las armas.

La sublevación de Villacampa

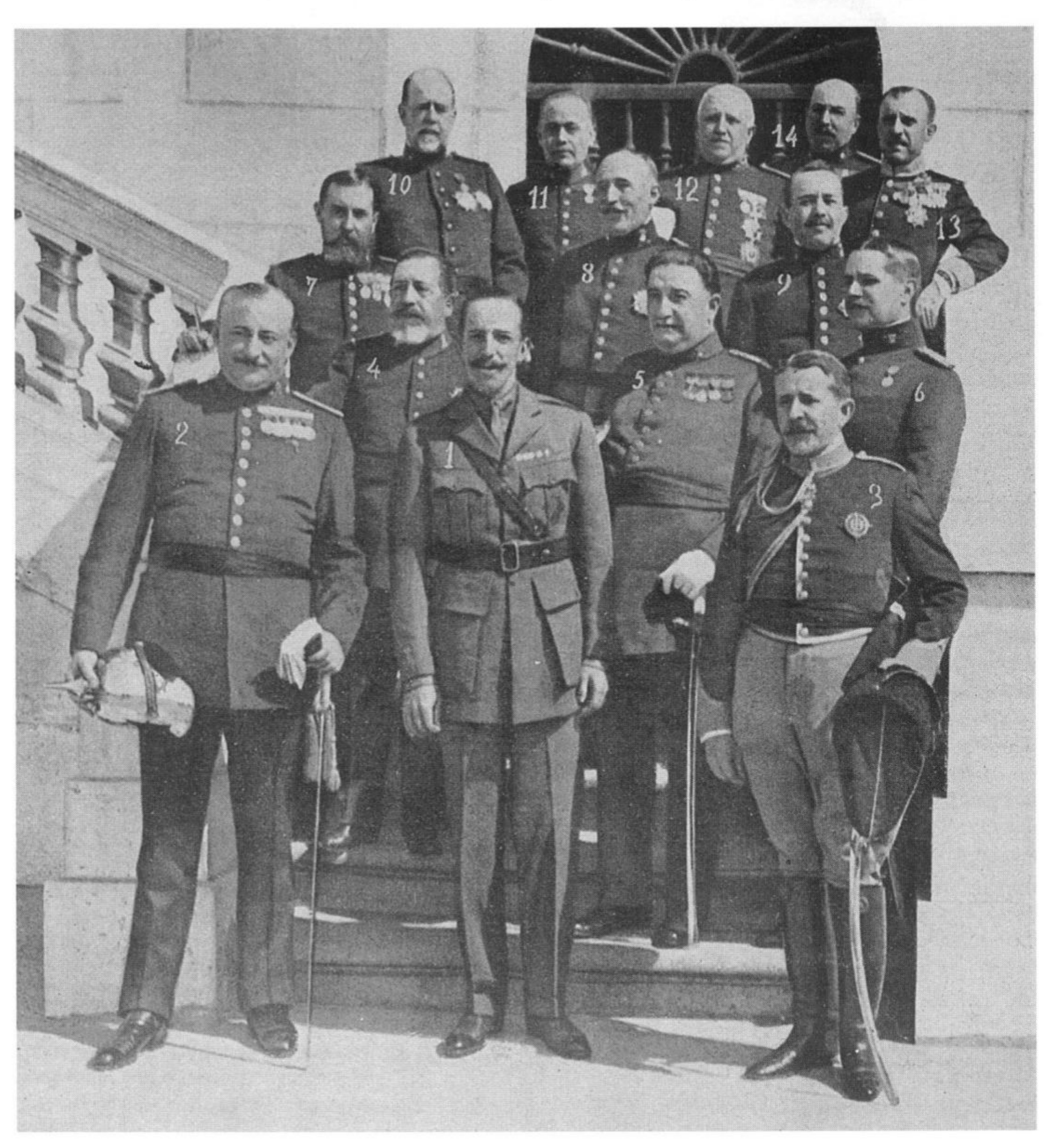
Llegó finalmente el gran alzamiento preparado por la *AMR*. Aplazada varias veces, los generales comprometidos habían renunciado sucesivamente hasta que sólo perseveró Villacampa, resentido por haber sido represaliado y pasado a la reserva, acusado de republicano. El golpe estaba previsto para el 25 de septiembre 1886, pero fue adelantado al 19 a causa de algunas defecciones y el temor a que fuera descubierto. Cuando Villacampa se alzó en Madrid con algunas fuerzas, no fue secundado por los paisanos ni por la artillería, en una ciudad donde faltaba ambiente, tanto militar como civil, en favor del alzamiento. El escaso entusiasmo retrajo incluso a muchos republicanos que presenciaron pasivamente el movimiento. En plena incertidumbre, un general y un coronel monárquicos fueron muertos por los alzados, que acabaron desbandándose al ver que nadie les secundaba.

También los exiliados en Francia habían iniciado su intento y atravesado la frontera en tres pequeñas partidas; dos de ellas fueron interceptadas por fuerzas del Gobierno, la tercera no actuó y Ruiz Zorrilla, que había llegado hasta la frontera, debió regresar a París mientras Sagasta pedía su procesamiento a los Gobiernos europeos, que no atendieron sus peticiones. Aunque Villacampa, un teniente y cuatro sargentos fueron condenados a muerte y 300 comprometidos a cadena perpetua, la reina y Sagasta conmutaron los fusilamientos, por la prisión en Fernando Póo. Tras tantos fracasos, la AMR se descompuso y, desaparecido el peligro, el Gobierno amnistió a sus antiguos miembros. La gran época de los pronunciamientos había terminado.

Dictadores y pronunciados

Aunque el militarismo siempre estuvo presente en España, tras el fracaso de Villacampa parecía haber desaparecido el intervencionismo militar en un ejército sin grandes transformaciones internas, hasta que el deterioro de la situación política y social en 1922 llenó los mentideros madrileños de rumores. Después del desastre de Annual, mientras la oposición política apuntaba como responsables al general Berenguer y al mismo Alfonso XIII, cuatro generales muy vinculados a la cortes, Cavalcanti, Federico Berenguer, Saro y Daban, llamados *el cuadrilátero,* preparaban una maniobra para dar un golpe y poner el gobierno en manos del general Aguilera. Pero el dictador previsto quedó desacreditado pintorescamente cuando Sánchez Guerra le abofeteó en el despacho del presidente del Senado. Se

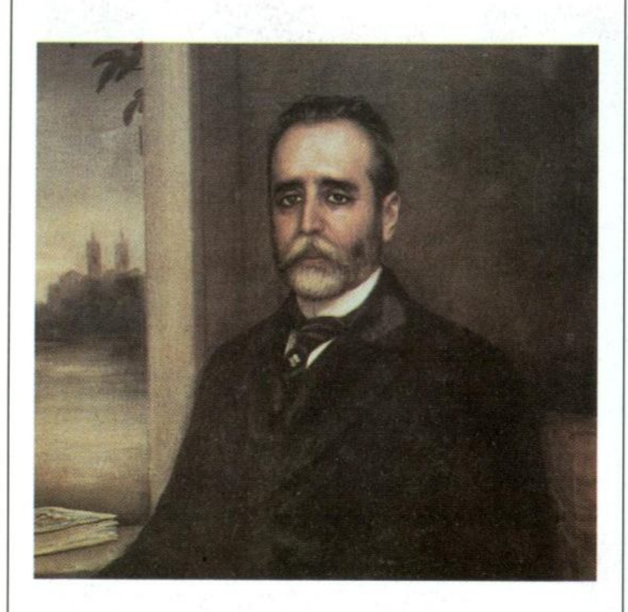
Izquierda, Manuel Ruiz Zorrilla, el eterno conspirador. Abajo, el Directorio militar de Primo de Rivera con Alfonso XIII en el otoño de 1923



reveló entonces como posible candidato Miguel Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, que estaba apoyado por la burguesía catalana, deseosa de una solución de orden al terrorismo sindical.

Monárquicos, primorriveristas y republicanos

El malestar militar, generado por las críticas tras la derrota marroquí de 1921, se encrespó cuando el Gobierno conmutó la pena de muerte impuesta a un cabo, que se había insubordinado durante un embarque de tropas y matado a un oficial. Militares de relieve colaboraban con las maquinaciones de Primo de Rivera, como el general Sanjurjo, resentido tras su traslado desde Marruecos a Zaragoza, y el coronel Nouvillas, antiguo líder de las Juntas de Defensa.



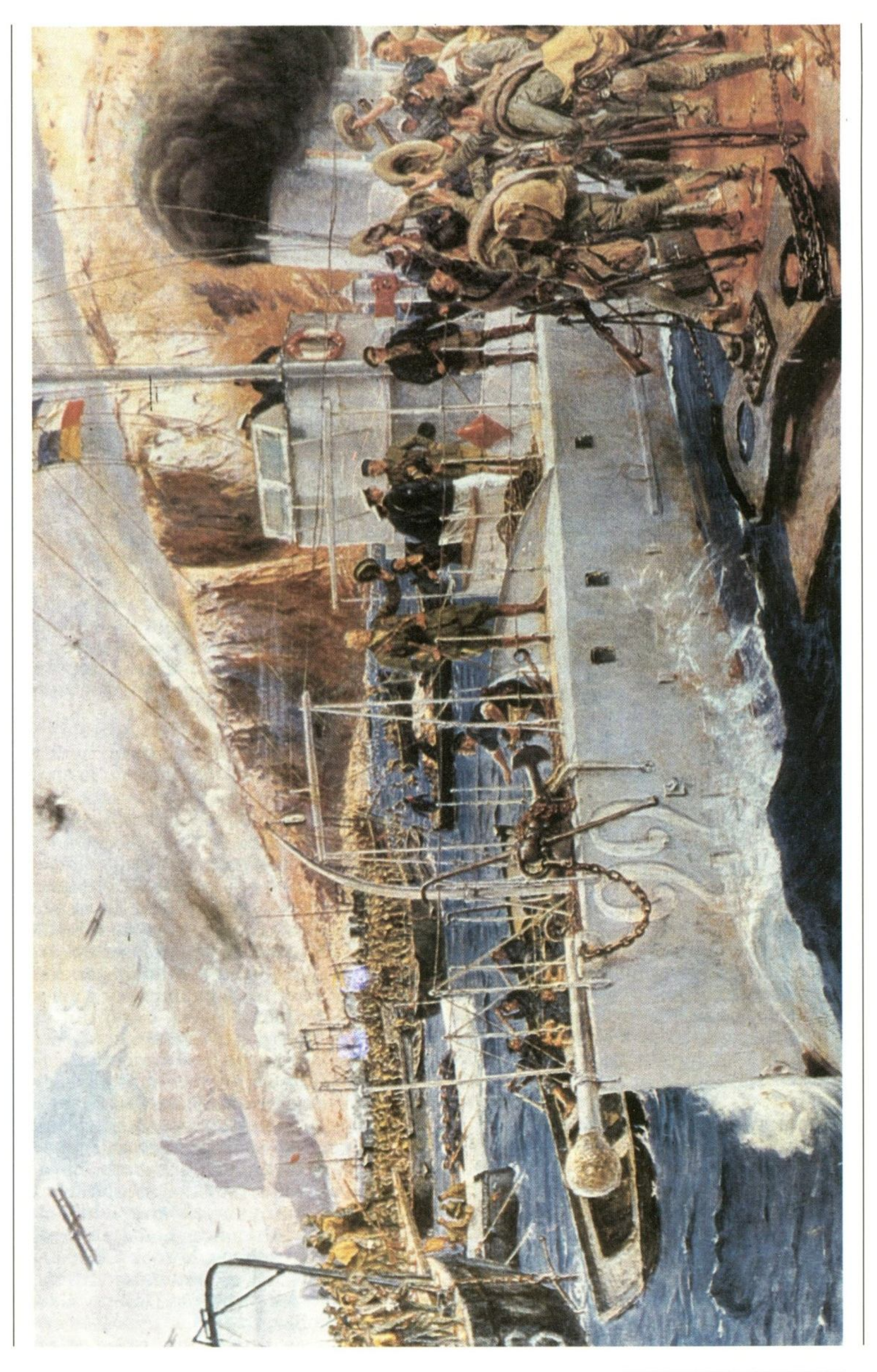
El 14 de septiembre de 1923, cuando las Cortes estaban a punto de iniciar el debate sobre las responsabilidades de Annual, Primo de Rivera publicó un manifiesto en el cual afirmaba atender *el clamoroso requerimiento* de los españoles que pedían ser liberados de *los profesionales de la política,* prometía *acabar con las responsabilidades,* aludía a los sindicatos terroristas, al caos económico, anunciaba la creación de un *Gran Somatén Armado,* la defensa del honor del ejército y la búsqueda para Marruecos de una solución *pronta, digna y sensata.* El año anterior, Mussolini había obtenido el poder en Italia mediante la *Marcha sobre Roma,* y Alfonso XIII aceptó el golpe de Estado. Primo de Rivera suspendió la Constitución y organizó una junta militar que apenas encontró oposición.

La conculcación del sistema constitucional y la interposición de Primo de Rivera entre el rey y el ejército resucitó los pronunciamientos. En los primeros momentos se opusieron al dictador los oficiales de Marruecos, indignados porque Primo de Rivera deseaba abandonar muchas posiciones del interior y replegarse hacia la costa. Pero todo quedó en algunas tiranteces cuarteleras de Primo con el general Queipo de Llano, el teniente coronel Franco y la oficialidad del Tercio, cuando el dictador visitó Marruecos. Sin embargo, desde el verano de 1925, se reanudaron las operaciones con la colaboración francesa y los africanistas pasaron a ser los más fieles aliados de la Dictadura.

La *sanjuanada*

Distinto cariz tuvo una conspiración militar que se desarrolló en 1925, con el general López de Ochoa, el coronel Pardo y, sobre todo, Segundo García, un coronel de caballería laureado y ascendido desde sargento en las campañas coloniales. Se trataba de un desordenado complot que fue desbaratado fácilmente y sus responsables, arrestados sin graves consecuencias; sin embargo, la fundación de Alianza Republicana originó otro más importante, cuya finalidad era un pronunciamiento planeado para el 24 de junio de 1926, noche de San Juan. La *sanjuanada,* como se le llamó, contaba con bastantes militares, entre ellos los generales Aguilera, López de Ochoa y Weyler, los coroneles Segundo García y Batet y el capitán Fermín Galán; políticos como Melquíades Alvarez, Romanones, Lerroux, y parte de la CNT. El pronunciamiento fracasó en Madrid y al día

Izquierda, José Sánchez Guerra, un conspirador contra la dictadura de Primo de Rivera, muy contestado, incluso dentro del ejército, hasta el desembarco de Alhucemas. En el cuadro de la derecha, el general, vitoreado por las tropas durante esa acción militar en Marruecos.



siguiente en Tarragona y Valencia, sin más graves consecuencias para la mayoría de conjurados que algunas detenciones y multas. En cambio, Segundo García y algunos militares fueron expulsados del ejército.

Casi simultáneamente, un intento de reformar el sistema de ascensos de los oficiales de artillería originó el choque más importante ocurrido entre Primo y los militares. El dictador pretendía que los artilleros abandonaran su tradicional sistema de ascensos por antigüedad y aceptaran la promoción por méritos de guerra, como los oficiales de infantería y caballería. El proyecto provocó la dimisión del jefe de la sección de artillería del Ministerio, el



arresto de su sucesor y, cuando fue impuesto por un decreto de 9 de junio de 1926, el encierro en sus cuarteles de los jefes y oficiales de artillería. El dictador los suspendió de empleo y sueldo, muchos de ellos fueron confinados y algunos, encarcelados.

El complot de Sánchez Guerra

Prosiguieron las conspiraciones militares hasta que, en 1929, Alianza Republicana preparó un nuevo pronunciamiento, que alineó a muchos artilleros, los implicados en la *sanjuanada* y parte de la CNT. El plan, cuya finalidad era derrocar a Alfonso XIII y convocar Cortes constituyentes, estaba encabezado por Sánchez Guerra, que confiaba en el capitán general de Valencia, Castro Girona. Sin embargo, el militar cambió de idea cuando ya se había dado el aviso de sublevación, por lo que el regimiento de artillería de Ciudad Real se sublevó en solitario hasta que fue reducido por columnas mandadas por Sanjurjo y Orgaz. Las represalias contra los artilleros incrementaron entonces su oposición al Gobierno, el consejo de guerra contra los alzados de Ciudad Real condenó a muerte al coronel y dos capitanes, pero varios miembros del tribunal votaron contra la sentencia, el capitán general se negó a ratificarla y el Supremo la anuló. También Sánchez Guerra fue absuelto en otro consejo presidido por el general Federico Berenguer, hombre muy cercano al rey que demostró el despego existente entre el dictador y la corte.

Cuando Primo de Rivera dimitió, marchó a París y el rey nombró presidente del Gobierno al general Dámaso Berenguer, no cesaron los complots militares que ya buscaban decididamente la República. Berenguer intentó hacer las paces con los oficiales que habían estado enfrentados a Primo de Rivera, pero fracasó porque la oposición tenía ya más ánimos que las fuerzas gubernamentales.

Jaca y Cuatro Vientos

Desde que, el 17 de agosto de 1930, se firmó el Pacto de San Sebastián y comenzó a funcionar un Comité Revolucionario, los oficiales republicanos formaron un Comité Militar, destinado a auxiliarlo bajo la presidencia de Queipo de Llano. El frente antimonárquico preparaba una huelga general que debía ser acompañada por varios pronunciamientos, pero, como tantas veces, el día inicial fue aplazado sin que lo supieran los comprometidos de Jaca, donde, el 12 de diciembre de 1930 el capitán Fermín Galán y la guarnición se alzaron en armas, secundados por los republicanos locales.

Aunque Galán era un hombre próximo al anarquismo, sus compañeros presentaban un amplio marco ideológico. Sediles era masón, Gallo y García Hernández católicos, Muñoz y Gisbert republicanos. El pronunciamiento fue derrotado y los capitanes Galán y García Hernández, fusilados, mientras sus compañeros quedaban presos; en



Izquierda, Fermín Galán, el golpista de Jaca; arriba, el general Rodríguez Mantecón y dos de sus comandantes que derrotaron a los sublevados de Galán

solidaridad, el Comité Revolucionario publicó un manifiesto e intentó activar todo el plan huelguístico e insurreccional sólo secundado por Queipo de Llano. Ramón Franco y un grupo de aviadores tomaron el aeródromo militar de Cuatro Vientos para comprobar que se habían quedado solos. Poco antes de que llegara una columna gubernamental, dos aviones con los sublevados más importantes despegaron hacia Portugal.

Los militares y la República

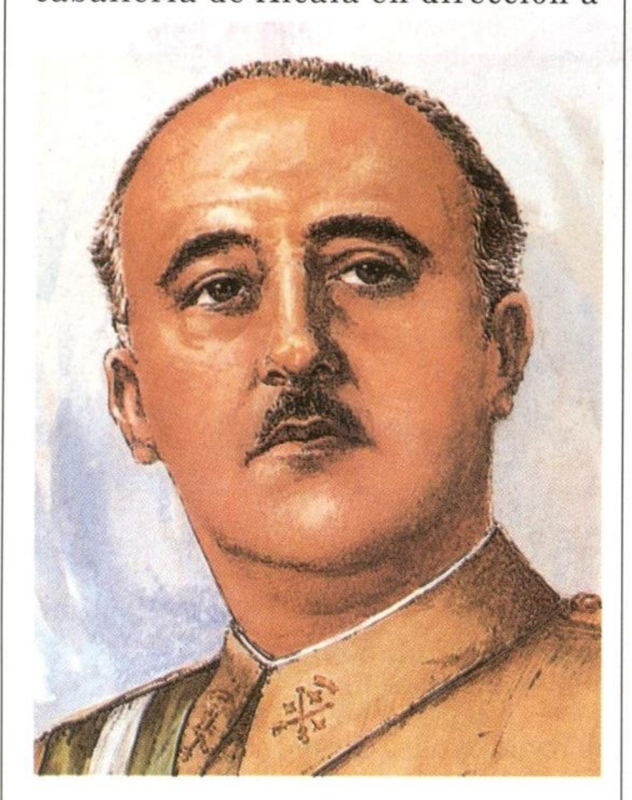
El ejército estaba escindido entre republicanos, carlistas, primorriveristas y alfonsinos, amén de la mayoría conservadora y monárquica, burocrática y acomodaticia. Las luchas internas ocurridas desde 1923 habían radicalizado a los oficiales republicanos y escarmentado a los monárquicos que no se sentían dispuestos a complicarse en nuevos enredos. Sin un futuro político definido, el poder militar se inhibió ante el hundimiento de Alfonso XIII y la proclamación de la República, que estableció un precario equilibrio. Algunos militares republicanos, como los generales Queipo de Llano, Miguel Cabanellas y muchos artilleros, eran simplemente enemigos personales de Primo de Rivera; otros, como el grupo de aviadores encabezado por Ramón Franco, eran díscolo producto del personalismo acuñado en la guerra de Marruecos y con toda seguridad, en el conjunto del escalafón, el número de militares liberales y republicanos era pequeño.

La discusión del estatuto de Cataluña dio vuelos a las conspiraciones de aristócratas y antiguos primorriveristas, que existían desde el 14 de abril, y, sobre todo, a los cabildeos de los círculos de militares retirados de Madrid. La conspiración captó a Sanjurjo, que se había enfrentado al Gobierno republicano tras una época de colaboración, y a generales conservadores como Villegas, González Carrasco y Fernández Pérez.

El 10 de agosto de 1932, Sanjurjo, con su hijo Justo y su ayudante, el teniente coronel Esteban-Infantes, se trasladó a Sevilla, donde con un grupo de militares y destacados monárquicos civiles, declaró el estado de guerra, destituyó a las autoridades y declaró a la prensa que el golpe era únicamente contra el Gobierno, incapaz de mantener el orden público y la unidad de Es-

paña. Sin reticencias, la guardia civil y el ejército secundaron la acción.

El plan golpista de Madrid había sido puesto en conocimiento de la policía por una confidencia y el Gobierno se preparó para abortar la revuelta. Efectivamente, cuando, a las cuatro de la madrugada, un grupo de militares y paisanos, sólo secundados por un pequeño destacamento del cuartel de la Remonta, trató de apoderarse por sorpresa del Ministerio de la Guerra y el Palacio de Comunicaciones, fueron interceptados por los guardias de asalto, que les rechazaron a tiros. Al despuntar el día, los grupos habían ya sido reducidos y el capitán Fernández Pin, que marchaba con la caballería de Alcalá en dirección a



Madrid, volvió grupas cuando tuvo noticia del fracaso en la capital. Fueron detenidos los generales Cavalcanti, Goded, Fernández Pérez, los coroneles Varela y Sanz de Larín, varios jefes, oficiales y paisanos. El general Barrera emprendió la huida en una avioneta tripulada por Ansaldo.

Cuando, a media tarde, llegaron a Sevilla las noticias del fracaso, el derrotismo cundió entre los sublevados, hasta que una comisión militar expresó a Sanjurjo su voluntad de abandonar el movimiento. A primeras horas de la noche se retiraron las tropas y la población se manifestó en favor de la República. Pasada la una de la madrugada, Sanjurjo abandonó Sevilla por carretera, pero, a las seis, fue detenido por guardias de seguridad cerca de Huelva.

El 18 de Julio

Mientras que la *sanjurjada* había contado con civiles en su organización, la conspiración de 1936 fue totalmente militar, aunque actuaba como salvaguardia de los intereses conservadores y contó con estímulos y apoyos económicos ajenos al ejército. Le prestaron ayuda Juan March y Luca de Tena; los partidos Renovación Española y Acción Popular, e incluso se fabricó cierta cobertura ideológica a cargo de pensadores próximos a Acción Española que habían desarrollado teorías militaristas durante los años treinta. Sin embargo, ni la Junta de Generales, que ejercía la dirección teórica de la conjura, ni el general Mola, que controlaba la organización, toleraron interferencias civiles en la planificación y las líneas de mando.

La conspiración definitiva no funcionó hasta después de las elecciones de febrero de 1936 y cuando ya el Gobierno del Frente Popular había destituido o trasladado a los jefes militares considerados más peligrosos. A partir de abril, el general Mola creó una nueva trama muy personalizada, en la que se integraron militares que conspiraban desde 1931 y diversos grupos de descontentos. Basándose en ellos pudo influir sobre los sentimientos corporativos del cuerpo de oficiales y comprometer a bastantes mandos de tropa para intentar la aventura.

Esta era parcialmente conocida por el Gobierno, que puso en marcha algunas medidas para controlarla. Fue una de ellas, un registro policial en Melilla, la causa de adelantar el momento de la rebelión, fijada para la madrugada del 19 de julio, pero que estalló en Marruecos en la tarde del 17. La adhesión de las guarniciones al pronunciamiento fue lenta debido al cambio de fecha, al mal funcionamiento de los enlaces, a los titubeos de algunos implicados y a la naturaleza militar y jerárquica del movimiento, pues los comandantes y capitanes que vertebraban la conspiración no tomaron la iniciativa, sino que procuraron que los generales proclamaran el estado de guerra a fin de obtener la unanimidad en cada guarnición.



Izquierda, general Francisco Franco; arriba, página de un calendario con una alegoría de la sublevación militar (por Sáinz de Tejada)

El mecanismo jerárquico funcionó mal porque, con la excepción de Zaragoza, donde estaba Miguel Cabanellas, los generales con mando superior eran gubernamentales y los conjurados debieron sustituirlos o neutralizarlos. Operación que les dio buenos resultados en Valladolid, Burgos y Sevilla, malos en Madrid, Barcelona y Valencia y retrasó su triunfo en La Coruña. En cambio, la revuelta triunfó inmediatamente en Baleares y Canarias, cuyos mandos supremos conspiraban, y en Marruecos, donde los generales republicanos fueron arrollados por una oficialidad colonial y reaccionaria.

Pero el día 20 de julio, la sublevación quedó sin jefe porque Sanjurjo murió en un accidente aéreo cuando iniciaba su traslado desde Portugal. Mola improvisó, entonces, en Burgos, una Junta de Defensa Nacional cuyo presidente era paradójicamente el general Cabanellas, un republicano conservador. Sin establecer un plan político, los sublevados se esforzaron en tomar Madrid, objetivo inicial del pronunciamiento. Pero su fracaso militar ante la capital y la incapacidad del gobierno para derrotarlos convirtieron el pronunciamiento en una guerra civil.

Un nuevo ejército

Cuando ésta concluyó, poco tenía que ver el ejército de Franco con el de 1936. La mutación era tanta que hasta el viejo espíritu aristocrático y técnico de los artilleros parecía arrollado. La mayoría de los militares ya no era de miembros de las antiguas y orgullosas dinastías profesionales ni se había educado en las academias, sino que era un producto de las trincheras, con una mentalidad nueva, basada en los

lugares comunes de lo que luego se llamó franquismo. El cuerpo de oficiales se nutrió con los antiguos alféreces provisionales de la guerra civil, que impregnaron el ejército de una mezcla dogmática de nacionalismo, anticomunismo, antiliberalismo y devoción personal a Franco. Mentalidad que se armó con la ideología del régimen a medida que éste la explicitaba y, aunque muchos de ellos habían sido falangistas o carlistas en los primeros tiempos, predominó la mentalidad ordenancista que encajaba perfectamente con la clase media tradicional: desconfianza de la política, creencia en los valores tradicionales, esencia de la Patria, orden simple y externo.



Diario16 EDICION DE TARDE

MADRID, MARTES 24 FEBRERO 1981 — 25 pesetas

¿QUE ESPERA EL LOCO DE TEJERO?

Cinco minutos antes de las diez de la mañana el teniente coronel Tejero ha permitido a las mujeres miembros de la Cámara de los Diputados abandonar el Palacio del Congreso. Al menos once de los guardias civiles insurrectos se han entregado entre tanto a la Policía Militar. La rendición de Tejero y los hombres que aún resisten junto a él puede ser inminente y no deja de causar estupor su persistencia. La normalidad en todo el país es absoluta, quedando garantizada la continuidad del orden constitucional.

Al filo del mediodía los insurrectos continúan reteniendo al Gobierno y al Parlamento en pleno

Las diputadas pudieron abandonar el

Los rebeldes, enérgicos

Incidente de Fraga

Portada de Diario 16 con el golpe del teniente coronel Tejero, el 23 de febrero de 1981

En la cúspide quedaban todavía veteranos generales monárquicos, autores del pronunciamiento de 1936, que habían sido fundamentales en la guerra. Temeroso de ellos, Franco no les confió cargos políticos desde donde pudieran maniobrar contra él; en cambio entregó una franja de responsabilidades de confianza a militares de graduaciones intermedias con formación intelectual por encima de sus compañeros. Las discrepancias del dictador con un pequeño grupo de generales fueron importantes, sin llegar a constituir un problema serio para él, ni llegar a conocimiento de los cuarteles. Kindelán, Vigón, Orgaz y Ponte deseaban restaurar la monarquía inmediatamente, para soldar las diversas tendencias que confluyeron el 18 de julio. Los generales más jóvenes y producto de la guerra como Varela o Yagüe, eran partidarios de que la restauración fuera producto de la decisión de los vencedores. Esta fue la opción triunfante y apoyado en la fidelidad total de los cuadros medios y bajos, Franco maniobró entre generales falangistas como Yagüe, ex republicanos como Queipo o Aranda, antialfonsinos como Muñoz Grandes, primorriveristas como Jordana o Martínez Anido y monárquicos de distintas opciones: Varela, carlista, Kindelán y Vigón, juanistas, aunque el segundo de lealtad franquista. Cuando en los años cincuenta desaparecieron los viejos generales, Franco quedó instalado cómodamente sobre el organigrama que dominaban sus antiguos subordinados en la guerra de Marruecos y nutrían cuerpos de oficiales y suboficiales fanáticos de su persona y fieles a los ideales *militares* de la guerra civil.

En los años setenta, la jubilación de los antiguos alféreces provisionales permitió el ascenso de los militares formados en la Academia General de Zaragoza. Eran oficiales, formados en una mala carrera que les había hecho perder la juventud en cargos subalternos y sus vivencias no eran la campaña del Rif y la guerra civil que conocían por referencias: más administradores que guerreros de un ejército sin guerras; funcionarios de una máquina de guerra sin tecnología y sometida a la disciplina mesiánica de los *provisionales*. Cuarenta años de dictadura configuraron el ejército más obediente de la historia de España. Mayoritariamente franquistas de corazón, los militares mantuvieron la disciplina durante toda la transición política aunque no hicieran suyas las nuevas ideas.

Durante los últimos años de la vida del dictador se produjeron inquietos movimientos del militarismo franquista que no se resignaba a morir. Pero la amenaza de la involución y el golpe ultra fue compensada por la jubilación masiva por edad de los militares de la guerra, la apuesta democrática de la monarquía y la existencia de una sociedad española y europea en nada parecida a la de 1936. Los nuevos tiem-

pos propiciaron que, incluso en el seno del cuerpo de oficiales naciera la Unión Militar Democrática, opuesta a las veleidades involucionistas y alineada con las fuerzas democráticas.

Cuando murió el dictador la mayor parte de los oficiales de la guerra civil no estaba en activo, aunque todavía ocupaban los altos mandos. El poder omnímodo de Franco había, sin embargo, domesticado la tradición de rebeldía militar. Los oficiales eran en 1975 un cuerpo de funcionarios e, incluso los más franquistas, obedecían en todo momento a sus mandos, a pesar de extemporáneos desahogos verbales. Franco, probablemente sin reflexionarlo, había utilizado durante cuarenta años el viejo artificio canovista de confundir la jefatura del Estado con la del ejército. En el mundo militar, el resultado fue la disciplina como hábito.

El pronunciamiento de Tejero

El intento del 23-F fue mezcla del militarismo franquista que no se adaptaba a la democracia y de la exasperación producida por los asesinatos de ETA. El teniente coronel Tejero, de la guardia civil, era un oficial sin relieve hasta que su destino en el Norte y la lucha contra el terrorismo le obsesionaron. Puesto en contacto con grupos nostálgicos del franquismo y antiguos miembros de los servicios de información de Carrero, inició una dinámica de enfrentamientos con sus superiores políticos del Ministerio del Interior. Su actividad se fijó en organizar una conspiración para derribar el Gobierno mediante un golpe por sorpresa, hasta que fue descubierto su complot con el capitán Sáenz de Inestrillas, la llamada *Operación Galaxia,* que le costó una leve condena.

Empecinado en su plan, conectó con otros descontentos, como el capitán general de Valencia Jaime Milans del Bosch, el general Torres Rojas, antiguo jefe de los paracaidistas, y el coronel Sanmartín, mano derecha de Carrero Blanco. El 23 de febrero de 1981, mientras se votaba la investidura de un nuevo Gobierno, Tejero al frente de doscientos guardias civiles ocupó el Congreso de los Diputados, secuestrando a éstos y al Gobierno. Simultáneamente se pronunció Milans del Bosch en la capitanía general de Valencia y algunas fuerzas de la División Acorazada tomaron los estudios de televisión y radio de Prado del Rey.

Durante horas, Tejero y Milans del Bosch permanecieron sublevados, mientras el general Armada intentaba pactar con ellos un Gobierno nombrado al margen de la legalidad constitucional y algunos conspiradores se les unían, como el comandante Pardo Zancada, que llegó al Congreso al frente de una compañía de policía militar. En la confusa situación, el resto del ejército mantuvo la disciplina, hasta que el rey Juan Carlos I pudo asegurar la obediencia de todos los altos mandos, lograr la vuelta a los cuarteles de las tropas de Valencia y dirigirse al país por televisión. Una vez más, el viejo truco de Cánovas desarbolaba un pronunciamiento. Horas después se rindió Tejero.

Bibliografía

Busquets, J., *El militar de carrera en España.* Ariel, Barcelona, 1984. *Pronunciamientos y golpes de Estado en España.* Planeta. Barcelona 1982. Cardona, G., *El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil.* Siglo XXI, Madrid, 1981. Christiansen, E., *Los orígenes del poder militar en España (1800-1854).* Aguilar, Madrid, 1973. Fernández Bastarreche F., *El Ejército español en el siglo XIX.* Siglo XXI, Madrid, 1978. Headrick, D., *Ejército y política (1866-1898).* Tecnos, Madrid, 1981. Hennessy, C. A. M., *La República Federal en España.* Aguilar, Madrid, 1966, p. 226. Lleixa, J., *Cien años de militarismo en España.* Anagrama. Barcelona, 1986. Martínez, J. y Busquets, J., *El último pronunciamiento del siglo XIX,* en Historia 16, Año XI, n.º 128, pp. 11-28. Oneto, J., *La noche de Tejero.* Cambio 16, Madrid, 1981. Payne, Stanley G., *Ejército y sociedad en la España liberal. (1808-1936).* Akal, Madrid, 1977. Seco Serrano, C., *Militarismo y civilismo en la España contemporánea.* Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1984. Urbano, P., *Con la venia... yo indagué el 23 F.* Argos Vergara, Barcelona, 1982. VV.AA., *La Sanjurjada,* en Historia 16, año VII, n.º 76, pp. 43-67. Madrid, 1982. VV.AA., *La conspiración contra la República* y *El 18 de julio,* en *La Guerra Civil. Tomos 3 y 4.* Historia 16. Madrid, 1986-1987.

La acción del alcohol, desde el punto de vista de la Seguridad Vial, que más nos interesa es conocer sus efectos sobre el sistema nervioso central, pues de ella dependen las modificaciones en las aptitudes y en los comportamientos del conductor.

El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central, *en el que actúa como un anestésico, similar en sus funciones a los anestésicos generales utilizados en la medicina, y que actúa a todos los niveles del Sistema Nervioso. El alcohol que llega al cerebro actúa sobre éste y* desorganiza y desestabiliza *su funcionamiento.*

La aparente estimulación ejercida por el alcohol (euforia), es en definitiva una depresión de los mecanismos de control inhibitorio del cerebro.

En general, los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso central son proporcionales a su concentración en sangre, siendo sus efectos más importantes los siguientes:

a) Crea un falso estado de euforia, de seguridad y optimismo y un excesivo nivel de confianza en el conductor.
b) Disminuye los reflejos, aumentando el tiempo de reacción.
c) Disminuye la visión y la percepción, reduciendo el campo visual.
d) Disminuye la capacidad de movimientos.
e) Modifica las capacidades mentales de juicio, razonamiento, y las de atención y concentración.
f) Falsea la correcta apreciación de distancias y velocidades.

Por último señalar que la alcoholemia aparece como factor influyente o desencadenante de aproximadamente el 35% de los accidentes graves, y es el causante de casi el 50% de los muertos en accidentes de tráfico.



